



En las sentencias que establecieron que el contrato de apertura de crédito, con cláusula de crédito adicional para el pago de intereses, era válido, se esgrimieron los siguientes cuatro argumentos, mencionándose después de ellos el número de las ejecutorias con el que pueden localizarse en el correspondiente legajo:

I.- El Reglamento sobre Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares de Crédito no es aplicable pues, como su nombre lo indica, sólo rige para las Instituciones Nacionales de Crédito, entendiéndose por tales las instituciones de banca pertenecientes a la Administración Pública Federal, así como para las Organizaciones Auxiliares de Crédito, como son los Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Sociedades de Ahorro y Préstamos, Uniones de Crédito, Empresas de Factoraje Financiero (de conformidad con lo que establece el artículo 3º de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito) y, en cambio, el acreditante en los casos resueltos no tuvo el carácter mencionado, sino que fueron instituciones de crédito privadas, que se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito vigente. (Amparo directo civil **246/97-2**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito [número 88 del legajo]; amparo directo civil **398/96**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Cuarto Circuito [número 109 del legajo]; y, amparo directo civil **1412/97**, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito [número 197 del legajo]).

II.- Como conforme al artículo 9° del Código Civil, la emisión de una ley posterior deroga la anterior, aun cuando no se haya abrogado expresamente el Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Nacionales de Crédito, bastó para ello la emisión de las Leyes Reglamentarias del Servicio Público de Banca y Crédito, actualmente derogada por la Ley de Instituciones de Crédito, para que dejara de estar vigente el citado Reglamento. (Amparo directo civil **38/97**, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 44 del legajo]; amparo directo civil **486/97**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito [número 78 del legajo]; y, amparo directo civil **209/98**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito [número 112 del legajo]).

III.- En ninguna de las fracciones del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito se prohíbe el establecimiento de un préstamo adicional para pago de intereses, porque si bien su fracción XVII dispone la prohibición de otorgar créditos con garantía de pasivos, a que se refieren las fracciones I, b), c) y d), y II a IV, del artículo 46 de dicha ley, éstos se refieren a otros supuestos, como son: recepción de depósitos bancarios de dinero retirables en días preestablecidos, de ahorro a plazo previo, aceptación de préstamos y créditos, emisión de bonos bancarios y de obligaciones subordinadas, hipótesis que no se ubican en el préstamo adicional para pago de intereses de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y sistema de refinanciamiento, operación permitida a los bancos en el



artículo 46, fracción IV, del citado ordenamiento. No procede aplicar analógicamente lo dispuesto en la fracción V del artículo 66 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prohíbe que en los contratos refaccionarios el monto destinado a cubrir los pasivos a que se refiere el numeral 323 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, rebase un porcentaje mayor del 50%, toda vez que tal disposición es específica y no constituye un supuesto general susceptible de actualizarse en cualquiera de los tipos de contrato o créditos que se puedan verificar. (Amparo directo civil **663/97**, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 15 del legajo]; amparo directo civil **594/97**, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito [número 96 del legajo]; amparo directo civil **254/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito [número 156 del legajo]; y, amparo directo civil **137/98**, del Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito [número 189 del legajo]).

IV. El crédito otorgado no es un financiamiento para el pago de pasivos, pues ninguna prueba hay que así lo establezca y, además, el pago del crédito será a cargo del acreditado como deudor directo, sin que de forma alguna deba solventarse con recursos propios del banco. (Amparo directo civil **439/98**, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito [número 70 del legajo]; amparo directo **693/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito [número 117 del legajo]; amparo directo **705/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito [número 121 del legajo]; y, amparo directo



847/97, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (número 127 del legajo).

En las sentencias en las que se concluyó determinando que el contrato especificado es inválido, se esgrimieron los argumentos que a continuación se especifican, dándose los datos relativos a las ejecutorias respectivas, al órgano que las pronunció y al número con el que se les identificó en el legajo correspondiente, en los que pueden localizarse:

***"El banco concedió un crédito para pago de pasivos en favor de sí mismo, en contra de lo dispuesto por el artículo 8° del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Nacionales de Crédito, que dispone que no está permitido conceder esa clase de préstamos. Los elementos que se requieren para acreditar el anterior extremo son los siguientes: a) Existencia de un crédito; b) Pacto de pago de intereses a una tasa determinada; c) Pago de una suma mensual; d) Posibilidad de que los pagos mensuales no alcancen a cubrir el monto de los intereses devengados; e) Existencia de un crédito adicional, diseñado para pagar intereses devengados no cubiertos."*** (Amparo directo civil 4457/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 31 del legajo]); amparo directo civil 6397/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia





Civil del Primer Circuito [número 34 del legajo]; amparo directo civil **1037/97**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 36 del legajo]; y amparo directo civil **1887/98**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 38 del legajo]).

En relación con el criterio acabado de destacar, se formuló la tesis **1.7°.C. 16 C**, visible en la página ochocientos nueve, del Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

**"PAGO DE PASIVOS, NULIDAD DEL PRÉSTAMO  
"PARA, OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE  
"CRÉDITO.- De conformidad con el inciso b) del  
"artículo 8° del Reglamento sobre las Instituciones  
"Nacionales y Organizaciones Auxiliares  
"Nacionales de Crédito, dichos organismos están  
"impedidos para efectuar financiamientos para  
"pago de pasivo, salvo casos especiales  
"autorizados por la Secretaría de Hacienda y  
"Crédito Público; en consecuencia, resulta nula de  
"pleno derecho la operación consistente en el  
"otorgamiento de un crédito adicional en un  
"contrato de apertura de crédito con interés y  
"garantía hipotecaria, por tratarse de un esquema  
"de refinanciamiento que el banco acreditante**

*"realiza a través de movimientos contables de  
"cargo y abono, tomando del crédito adicional el  
"importe necesario para que el acreditado, sin  
"recibir ningún dinero, pague los intereses  
"devengados y no cubiertos con la mensualidad  
"realizada, simulando el cobro por su cuenta de  
"cantidades adeudadas, lo que constituye un  
"préstamo para pago de pasivos."*

Apuntado lo anterior, corresponde dilucidar, como punto de contradicción, si el mencionado artículo 8º, inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, resulta o no de observancia obligatoria para las partes en el momento de celebrar un contrato de apertura de crédito, en el que se otorga un crédito adicional para el caso de que el deudor no pueda cumplir en su totalidad el pago derivado del crédito inicial.

Para ello en principio cabe señalar que, el citado Reglamento, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve; en la inteligencia de que su contenido es el siguiente:

*"Artículo 1º.- Se crea el Comité Coordinador de las  
"Instituciones Nacionales de Crédito, bajo la  
"presidencia del Secretario de Hacienda y Crédito  
"Público, e integrado por los directores generales  
"de las siguientes instituciones:*



"a) Banco de México, S. A., cuyo representante  
"tendrá el carácter de Vicepresidente.

"b) Nacional Financiera, S. A.

"c) Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

"d) Banco Nacional Hipotecario Urbano y de  
"Obras Públicas, S. A.

"Cuando el Comité deba ocuparse de problemas  
"relativos o relacionados con las demás  
"instituciones nacionales de crédito u  
"organizaciones auxiliares nacionales de crédito,  
"los directores o gerentes generales respectivos,  
"integrarán también dicho Comité. El presidente  
"está facultado cuando lo estime oportuno, para  
"convocar a todos los directores y gerentes  
"generales de las mencionadas instituciones."

"Artículo 2º.- El Comité tendrá carácter consultivo,  
"debiendo someter sus recomendaciones a la  
"consideración del Ejecutivo, por conducto del  
"Secretario de Hacienda y Crédito Público. Sus  
"funciones principalmente consistirán en  
"dictaminar sobre los siguientes asuntos:



*"a) Delimitar competencias y establecer criterios  
"destinados a evitar la intervención de una  
"institución nacional de crédito o de una  
"organización auxiliar nacional de crédito en  
"campos ajenos a sus funciones.*

*"b) Considerar planes conjuntos de financiamiento  
"por las instituciones nacionales de crédito y por  
"las organizaciones auxiliares nacionales de  
"crédito, de acuerdo con las condiciones  
"económicas generales del país.*

*"c) Promover la colaboración permanente entre los  
"bancos privados y las instituciones nacionales, en  
"relación con programas de promoción y  
"financiamiento, de carácter regional o nacional.*

*"d) Procurar porque el otorgamiento de créditos  
"por las instituciones nacionales a las instituciones  
"privadas se destine a atender actividades  
"económicas fundamentales, cuyo financiamiento  
"sea proyectado por los bancos nacionales o  
"conjuntamente por éstos y la banca privada.*

*"e) Recomendar periódicamente las actividades  
"económicas que preferentemente deban fomentar*



"las instituciones y organizaciones auxiliares de  
"crédito.

"f) Procurar la mayor cooperación entre las  
"instituciones nacionales de crédito y las  
"organizaciones auxiliares nacionales de crédito,  
"sobre investigaciones y estudios técnicos o  
"económicos, con objeto de evitar duplicaciones y  
"de lograr la mejor coordinación en los métodos de  
"trabajo, así como el intercambio expedito de  
"informaciones.

"g) Propugnar la realización de los programas de  
"las mismas instituciones y organizaciones  
"auxiliares nacionales de crédito, sobre bases no  
"inflacionarias'.

"Artículo 3°.- El Comité Coordinador de las  
"Instituciones Nacionales de Crédito, a fin de influir  
"en el mejor aprovechamiento y la canalización  
"más productiva de los recursos en poder de  
"dichas instituciones, propugnará dentro de sus  
"facultades, que éstas contribuyan por medio de  
"sus programas de promoción y financiamiento a:

"a) Lograr la correcta integración de las industrias  
"básicas y, en general, de las actividades  
"económicas fundamentales.

"b) Aumentar la producción de bienes de capital o  
"de consumo, que el Estado considere  
"indispensables para estimular el desarrollo de la  
"economía nacional y mejorar las condiciones de  
"vida de las capas más amplias de la población.

"c) Diversificar las fuentes de trabajo y de riqueza  
"sobre la base de lograr el aprovechamiento y la  
"combinación más eficientes posibles de los  
"recursos productivos, en escala regional y  
"nacional.

"d) Coadyuvar al equilibrio de la balanza de pagos  
"y particularmente de la balanza comercial.

"e) Eliminar, en la medida posible,  
"intermediaciones innecesarias en el uso de  
"crédito'.

"Artículo 4º.- Las instituciones nacionales de  
"crédito y organizaciones auxiliares nacionales de  
"crédito en los primeros diez días del mes de  
"diciembre de cada año, deberán someter a la  
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez  
"aprobados por el Consejo de Administración, los  
"documentos que a continuación se mencionan,  
"relativos al siguiente ejercicio social:





**"I.- Una estimación de los recursos para sus operaciones indicando:**

**"a) Los procedentes de recuperaciones de cartera.**

**"b) Los que puedan provenir de otras fuentes, dando a conocer las condiciones generales de obtención de los mismos.**

**"II.- El programa de actividades, que en todo caso contendrá:**

**"a) Distribución de los recursos, señalando las inversiones propias y los financiamientos a terceros, por ramas de actividades beneficiadas.**

**"b) Planes elaborados sobre bases de cooperación con otras instituciones nacionales o privadas, y condiciones generales previstas.**

**"c) Indicación general del criterio que habrá de seguirse en las operaciones consideradas en el programa, especificando plazos y tipos de interés, medios y máximos.**

**"d) Informe sobre el plan realizado en el ejercicio inmediato anterior, comparándolo con el programa**

"aprobado. Esta información deberá comprender  
"todo el año, aun cuando habrá de formularse  
"estimación por el período no realizado y  
"mencionarán los principales factores favorables o  
"adversos que hubieren concurrido.

"e) *Fundamentación general del programa dentro*  
"de las finalidades de la institución respectiva y de  
"las circunstancias que prevalezcan en el país,  
"exponiendo las razones sobre la preferencia  
"adoptada en favor de las actividades que se  
"propongan.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá  
"formular las observaciones que estime  
"pertinentes, a efecto de que éstas se consideren  
"por el Consejo de Administración que  
"corresponda.

"Si dentro de los 30 días siguientes a la fecha de  
"presentación de los documentos respectivos, la  
"Secretaría de Hacienda no formulare observación  
"alguna, ni pidiera informaciones complementarias,  
"dichos documentos se tendrán por no  
"observados'.

"Artículo 5º.- Las instituciones y organizaciones  
"auxiliares regidas por el presente Reglamento



"deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y  
"Crédito Público en los primeros diez días del mes  
"de mayo y en los primeros diez días del mes de  
"septiembre, un informe sobre el estado que  
"guarde el desarrollo de los programas de  
"actividades que les hayan sido aprobados y sobre  
"los resultados de conjunto obtenidos en cada uno  
"de esos períodos.

"Sin perjuicio de la revisión que tiene a su cargo la  
"Comisión Nacional Bancaria, deberán presentar,  
"asimismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito  
"Público, con los informes correspondientes de  
"auditoría -antes de ser sometidos a las asambleas  
"de accionistas- los balances anuales, los estados  
"de pérdidas y ganancias y los proyectos de  
"distribución de utilidades, a efecto de que dicha  
"dependencia formule las observaciones que  
"estime pertinentes."

"Artículo 6º.- Las instituciones y organizaciones  
"mencionadas, requerirán autorización de la  
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los  
"siguientes casos:

"a) Para efectuar emisiones en serie de valores  
"mobiliarios.



*"b) Para adquirir por cuenta propia acciones o participaciones de cualquiera sociedad o empresa.*

*"c) Para otorgar gratificaciones de carácter general a sus funcionarios y empleados.*

*"d) Para efectuar inversiones inmobiliarias.*

*"e) Para el otorgamiento de avales o de garantías en general.*

*"f) Para obtener los financiamientos a que se contrae el Reglamento del artículo 4º de la Ley Reformativa de la Orgánica de Nacional Financiera, S. A.*

*"Si alguna institución, por la naturaleza de las operaciones que comprenda su objeto social así lo requiere, podrá solicitar autorización genérica para efectuar las operaciones a que se refieren los incisos a), b) y e) del presente artículo."*

*"Artículo 7º.- Sólo podrán adquirir directamente compromisos en moneda extranjera las siguientes instituciones nacionales:*



"a) El Banco de México, S. A.

"b) La Nacional Financiera, S. A.

"c) El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

"d) El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de  
"Obras Públicas, S. A.

"Las demás instituciones nacionales que requieran  
"recursos procedentes del exterior, operarán por  
"conducto de alguna de las instituciones antes  
"mencionadas."

"Artículo 8°.- Salvo casos especiales autorizados  
"por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
"las instituciones y organizaciones a que este  
"Reglamento se refiere, no podrán efectuar las  
"siguientes operaciones:

"a) Financiamiento para el simple cambio de  
"propiedad de cualquiera sociedad o empresa.

"b) Financiamientos para pago de pasivo'.

"Artículo 9°.- La Secretaría de Hacienda y Crédito  
"Público dictará las resoluciones a que se contraen

*"los artículos 4º, segunda parte del 5º, 6º y 8º,  
"previo estudio de los asuntos por una comisión  
"asesora permanente que tendrá los siguientes  
"miembros:*

*"a) El Subsecretario de Crédito de la Secretaría de  
"Hacienda y Crédito Público, quien presidirá la  
"comisión.*

*"b) El Director General de Crédito de la Secretaría  
"de Hacienda y Crédito Público.*

*"c) El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria.*

*"d) Un consejero de la serie "A" de cada una de las  
"siguientes instituciones:*

*"1.- Banco de México, S. A.*

*"2.- Nacional Financiera, S. A.*

*"3.- Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.*

*"4.- Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras  
"Públicas, S. A.*

*"Dicha comisión, al efectuar sus estudios, tendrá  
"en cuenta los informes y puntos de visita que*





"proporcionen el Director o Gerente de la  
"institución y organización a que el caso se refiera'.

"Artículo 10.- Los Consejos de Administración de  
"las instituciones nacionales de crédito y de las  
"organizaciones auxiliares nacionales de crédito se  
"reunirán, por lo menos, una vez al mes, y el  
"Director General o Gerente General de la  
"institución u organización respectiva, informará  
"mensualmente al Consejo, acerca de las  
"principales actividades realizadas en el mes  
"inmediato anterior."

"Artículo 11.- Los miembros de los Consejos de  
"Administración designados por la serie de  
"acciones que corresponda al Gobierno Federal y  
"los directores generales o gerentes generales de  
"las instituciones mencionadas en este  
"Reglamento, tendrán directamente a su cargo el  
"cumplimiento de los preceptos contenidos en el  
"presente ordenamiento, y en caso de violación de  
"éste, sin perjuicio de otras responsabilidades  
"legales, incurrirán en las que corresponden a los  
"mandatarios que infringen las instrucciones de  
"sus mandantes."

"Artículo 12.- Las disposiciones de este  
"ordenamiento serán aplicables en lo conducente a

*"las instituciones nacionales de seguros, y para  
"resolver los asuntos relativos a las mismas,  
"funcionará una comisión asesora permanente,  
"integrada como sigue:*

*"a) Por el Subsecretario de Crédito de la Secretaría  
"de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá el  
"carácter de presidente.*

*"b) Por el Director General de Crédito de la  
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.*

*"c) Por el Presidente de la Comisión Nacional de  
"Seguros.*

*"d) Por el Director General del Banco de México,  
"S.A. .*

*"La comisión indicada en este artículo dictaminará  
"cuáles de las disposiciones del presente  
"Reglamento son aplicables a las instituciones  
"nacionales de seguros."*

*"Artículo 13.- Previo estudio elaborado por la  
"comisión a que se refiere el artículo 9º., la  
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
"determinará cuáles de las disposiciones  
"contenidas en este Reglamento son aplicables a*





"los fondos permanentes de fomento económico  
"constituidos en fideicomiso por el Gobierno  
"Federal en las instituciones nacionales de  
"crédito."

"Artículo 14.- Los dictámenes que emita el Comité  
"Coordinador tendrán carácter obligatorio una vez  
"que sean aprobados por el Ejecutivo, y los de la  
"comisión asesora permanente cuando sean  
"aprobados por el Secretario de Hacienda y Crédito  
"Público."

"Artículo 15.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda  
"y Crédito Público para interpretar el presente  
"Reglamento y para expedir las reglas  
"complementarias que se requieran en la  
"aplicación del mismo."

"TRANSITORIOS:

"Artículo 1º.- El presente Reglamento entrará en  
"vigor el día de su publicación en el "Diario  
"Oficial."

"Artículo 2º.- Por lo que hace al año en curso, las  
"instituciones y organizaciones a que este  
"Reglamento se contrae deberán presentar, en un  
"plazo que vencerá el 31 de julio, la documentación

*"mencionada en el artículo 4º, abarcando las estimaciones, planes y programas que se formulen para el período comprendido de julio a diciembre.*

*"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos cincuenta y nueve.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena.- Rúbrica."*



El Reglamento en cita fue objeto de diversas reformas, publicadas en las fechas de veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y seis, seis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, y veintidós de julio de mil novecientos setenta y cinco, ninguna de las cuales alude al precepto que aquí se analiza.

De la lectura de los preceptos en comento se advierte con meridiana claridad, que el artículo 8º inciso b), establece la prohibición a las instituciones y organizaciones nacionales a que dicho reglamento se refiere, de efectuar financiamientos para el pago de pasivos, salvo los casos especiales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por otra parte, de la lectura de los artículos 1º al 7º y 9º al 15, se advierte que las instituciones a que dicho reglamento se refiere tienen el carácter





de instituciones nacionales de crédito, que en la actualidad se conocen como banca de desarrollo, puesto que sus actividades se encuentran constreñidas al fomento y aplicación de los programas dirigidos a beneficiar diversas actividades dentro de las finalidades específicas para las que fueron creadas dichas instituciones; de lo que se sigue, que el artículo en comento resulta inaplicable tratándose de las actualmente denominadas instituciones de banca múltiple, como lo son las que se encuentran involucradas en las contradicciones de tesis materia de esta ejecutoria.

Corroboran las conclusiones anteriores las consideraciones que se expusieron para la expedición del Reglamento que ha quedado transcrito, puesto que las mismas aclaran la finalidad del mismo y el ámbito de su aplicación. Dichas consideraciones dicen:

***"CONSIDERANDO: Que para incrementar en la  
"mayor medida y en el menor plazo posible el  
"ingreso nacional y elevar substancialmente el  
"nivel general de vida, es necesario el  
"aprovechamiento óptimo de la fuerza de trabajo y  
"de los recursos naturales y financieros de que el  
"país dispone; Que las instituciones nacionales de  
"crédito y las organizaciones auxiliares de crédito  
"representan ya un sector de gran importancia de  
"nuestro sistema crediticio; Que aun cuando  
"dichas entidades están regidas por normas***

*"legales y estatutarias, acordes con las finalidades  
 "y características específicas de su estructura y  
 "funcionamiento, para el mejor aprovechamiento  
 "de sus recursos es preciso que esos organismos  
 "coordinen sus actividades entre sí, así como con  
 "la banca privada. Que es indispensable, por tanto,  
 "implantar una política crediticia unitaria mediante  
 "una vinculación orgánica entre las autoridades  
 "financieras del país y las instituciones nacionales  
 "de crédito y las organizaciones auxiliares; Que  
 "esas mismas consideraciones son aplicables a los  
 "fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal  
 "en las instituciones nacionales de crédito e  
 "instituciones nacionales de seguros con fines de  
 "fomento económico. He tenido a bien expedir el  
 "siguiente Reglamento..."*

A mayor abundamiento, cabe hacer notar, que el Reglamento que nos ocupa fue expedido durante la vigencia de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno; ordenamiento jurídico que en sus artículos 1º, 3º y 5º estableció respectivamente que:

*"Artículo 1º.- La presente ley se aplicará a las  
 "empresas que tengan por objeto el ejercicio*



"habitual de la banca y del crédito, dentro del  
"territorio de la República.

"Se exceptuarán de la aplicación de la misma, el  
"Banco de México y las demás instituciones  
"nacionales de crédito, cuando así lo establezcan  
"las leyes.

"Se reputarán instituciones u organizaciones  
"auxiliares nacionales de crédito, cuando así lo  
"establezcan las leyes.

"Se reputarán instituciones u organizaciones  
"auxiliares nacionales de crédito, las constituidas  
"con participación del Gobierno Federal o en las  
"cuales éste se reserve el derecho de nombrar la  
"mayoría del Consejo de Administración o de la  
"Junta Directiva o de aprobar o votar los acuerdos  
"que la Asamblea o el Consejo adopten.

"Competerá exclusivamente a la Secretaría de  
"Hacienda y Crédito Público la adopción de todas  
"las medidas relativas tanto a la creación como al  
"funcionamiento de las instituciones nacionales de  
"crédito. Dicha Secretaría será el órgano  
"competente para todo cuanto se refiere a las  
"demás instituciones de crédito y organizaciones  
"auxiliares."

**"Artículo 3º.- Se consideran organizaciones  
"auxiliares de crédito, las siguientes:**

**"I. Almacenes Generales de Depósitos;**

**"II. Cámaras de Compensación;**

**"III. Bolsas de Valores, y**

**"IV. Uniones de Crédito.**

**"Estas organizaciones, para poder operar, deberán  
"registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y  
"quedarán sujetas a su vigilancia, sin perjuicio de  
"lo dispuesto respecto a los Almacenes Generales  
"de Depósitos y a las Bolsas de Valores en el  
"artículo 48."**

**"Artículo 5º.- Las denominaciones banco, banca,  
"banquero, financiera, crédito, capitalización,  
"crédito inmobiliario e hipotecarias, crédito  
"mobiliario o industrial, ahorro, cajas de ahorro,  
"fiduciaria, de fideicomiso, o cualesquiera otras  
"sinónimas, sólo podrán ser usadas en la  
"denominación de instituciones de crédito a las  
"que haya sido otorgada concesión, de  
"conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º.**





*"Se exceptúa de la aplicación del párrafo anterior  
"la asociación o asociaciones de instituciones de  
"crédito u organizaciones auxiliares, siempre que  
"no se realicen operaciones de banca y crédito.*

*"Las instituciones de crédito en cuya  
"denominación se incluya la palabra nacional, no  
"teniendo al carácter de institución de esta clase,  
"estarán obligadas a incluir en su denominación y  
"en todos sus documentos la indicación expresiva  
"de que son instituciones privadas.*

*"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la  
"Comisión Nacional Bancaria cuidarán, en todo  
"caso, de que en la denominación de las  
"instituciones de crédito, o en la documentación de  
"las mismas dirigida al público se contenga  
"indicación expresa del grupo de operaciones a  
"que se dedique, de conformidad con las  
"fracciones I a VI del artículo 2°."*

De lo anterior se colige que el ámbito de aplicación del citado Reglamento se constriñó a las ahora denominadas instituciones de banca de desarrollo y a las citadas organizaciones auxiliares de crédito, y no a las instituciones de banca múltiple o comerciales, respecto de las cuales el mismo nunca fue aplicable.

Igualmente debe destacarse que con posterioridad a la citada ley de mil novecientos cuarenta y uno, se expidió la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos en la que se determinó que el servicio público de banca y crédito sería prestado por instituciones constituidas como sociedades nacionales de crédito.

La ley de que se trata fue abrogada por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario oficial de la Federación del catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco; que en sus artículos 1º, 2º, 30, 31, 50, fracción V, y segundo transitorio estableció a la letra:

***"Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y  
"tiene por objeto reglamentar los términos en que  
"el Estado presta el servicio público de banca y  
"crédito; las características de las instituciones a  
"través de las cuales lo hace; su organización; su  
"funcionamiento en apoyo de las políticas de  
"desarrollo nacional; las actividades y operaciones  
"que pueden realizar, y las garantías que protegen  
"los intereses del público".***

***"Artículo 2º.- El servicio público de banca y crédito  
"será prestado exclusivamente por instituciones de  
"crédito constituidas con el carácter de sociedad***



**"nacional de crédito, en los términos de la presente  
"ley. Las sociedades nacionales de crédito serán:**

**"I. Instituciones de banca múltiple, y**

**"II. Instituciones de banca de desarrollo".**

**"Artículo 30.- Las instituciones de crédito sólo  
"podrán realizar las operaciones siguientes:**

**"I. Recibir depósitos bancarios de dinero:**

**"a) A la vista;**

**"b) De ahorro, y**

**"c) A plazo o con previo aviso;**

**"II. Aceptar préstamos y créditos;**

**"III. Emitir bonos bancarios;**

**"IV. Emitir obligaciones subordinadas;**

**"V. Constituir depósitos en instituciones de crédito  
"y entidades financieras del extranjero;**

"VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o  
"créditos,

"VII. Expedir tarjetas de crédito con base en  
"contratos de apertura de créditos en cuenta  
"corriente;

"VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros,  
"con base en créditos concedidos, a través del  
"otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de  
"títulos de crédito, así como de la expedición de  
"cartas de crédito;

"IX. Operar con valores en los términos de las  
"disposiciones de la presente ley y de la Ley del  
"Mercado de Valores;

"X. Promover la organización y transformación de  
"toda clase de empresas o sociedades mercantiles  
"y suscribir y conservar acciones o partes de  
"interés en las mismas;

"XI. Operar con documentos mercantiles por  
"cuenta propia;

"XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros  
"operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo  
"reportes sobre estas últimas;





**"XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;**

**"XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de  
"su importe, hacer efectivos créditos y realizar  
"pagos por cuenta de clientes;**

**"XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que  
"se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones  
"de Crédito, y llevar a cabo mandatos y  
"comisiones;**

**"XVI. Recibir depósitos en administración o  
"custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de  
"títulos o valores y en general de documentos  
"mercantiles;**

**"XVII. Actuar como representante común de los  
"tenedores de títulos de crédito;**

**"XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a  
"títulos de crédito, por cuenta de las emisoras;**

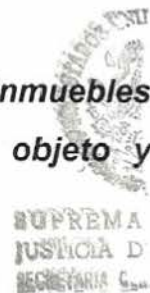
**"XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y  
"de registro de sociedades y empresas;**

**"XX. Desempeñar el cargo de albacea;**

*"XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la  
"liquidación judicial o extrajudicial de  
"negociaciones, establecimientos, concursos o  
"herencias;*

*"XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la  
"misma fuerza probatoria que las leyes asignan a  
"los hechos por corredor público o perito;*

*"XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles  
"necesarios para la realización de su objeto y  
"enajenarlos cuando corresponda, y*



*"XXIV. Efectuar, en los términos que señale la  
"Secretaría de hacienda y Crédito Público, oyendo  
"la opinión del Banco de México y de la Comisión  
"nacional Bancaria, las operaciones análogas y  
"conexas que aquella autorice".*

*"Artículo 31.- Las instituciones de banca de  
"desarrollo, realizarán, además de las señaladas en  
"el artículo anterior, las operaciones necesarias  
"para la adecuada atención del correspondiente  
"sector de la economía nacional y el cumplimiento  
"de las funciones y objetivos que les sean propios,  
"conforme a las modalidades y excepciones que*



"respecto a las previstas en esta u otras leyes,  
"determinen sus leyes orgánicas.

"Las operaciones a que se refieren las fracciones I  
"y II del artículo anterior, las realizarán las  
"instituciones de banca de desarrollo con vistas a  
"facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el  
"acceso al servicio público de banca y crédito y  
"propiciar en ellos el hábito del ahorro y el uso de  
"los servicios que presta el sistema bancario  
"nacional, de manera que no se produzcan  
"desajustes en los sistemas de captación de  
"recursos del público.

"Los bonos bancarios que emitan las instituciones  
"de banca de desarrollo, deberán propiciar el  
"desarrollo del mercado de capitales y la inversión  
"institucional.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
"dictará los lineamientos y establecerá las medidas  
"y mecanismos que procuren el mejor  
"aprovechamiento y la canalización más adecuada  
"de los recursos de las instituciones de banca de  
"desarrollo, considerando planes coordinados de  
"financiamiento entre este tipo de instituciones, las  
"organizaciones nacionales auxiliares del crédito,

*"los fondos y fideicomisos públicos de fomento, y  
"las instituciones de banca múltiple."*

*"Artículo 50.- Los contratos de crédito  
"refaccionario y los de crédito de habilitación o  
"avío que celebren las instituciones de crédito, se  
"ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de  
"Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases  
"siguientes:*

*"...V. No excederá del cincuenta por ciento la parte  
"de los créditos refaccionarios que se destine a  
"cubrir los pasivos a que se refiere el párrafo  
"segundo del artículo 323 de la Ley General de  
"Títulos y Operaciones de Crédito. La Comisión  
"Nacional Bancaria podrá autorizar, en casos  
"excepcionales, que se exceda este límite."*

*"Segundo.- Se deroga la Ley General de  
"Instituciones de Crédito y Organizaciones  
"Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la  
"Federación el 31 de mayo de 1941; la Ley  
"Reglamentaria del Servicio Público de Banca y  
"Crédito, publicada en el Diario Oficial de la  
"Federación el 31 de diciembre de mil novecientos  
"ochenta y dos; así como todas aquellas  
"disposiciones que se opongan a la presente ley".*





De la lectura de los numerales supracitados se aprecia, que la citada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de mil novecientos ochenta y cinco, estableció la autorización en favor de las instituciones de crédito, tanto de banca múltiple como de banca de desarrollo, de otorgar préstamos o créditos, y no prohíbe el otorgamiento de tales créditos para el financiamiento de pasivos; de manera que al regular la mencionada ley de que se trata la materia relativa al financiamiento de pasivos bajo circunstancias y lineamientos distintos y opuestos a lo estipulado en el Reglamento a que se alude, debe concluirse que el mismo quedó abrogado por disposición del artículo segundo transitorio de la ley en comento, en el que se consignó la derogación de todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicha ley; máxime, si se toma en consideración que en nuestro sistema jurídico los reglamentos constituyen disposiciones jerárquicamente subordinadas a las leyes que reglamentan, por lo que no pueden exceder sus alcances ni contrariarlas.

Las conclusiones expuestas se encuentran confirmadas y robustecidas por los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo del propio cuerpo legal.

En efecto, es necesario tener en consideración no sólo el artículo segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985, sino también los diversos cuarto, noveno y décimo, que se refieren específicamente a la

regulación que tendrían en adelante las instituciones nacionales de crédito e, incluso, las sucursales de bancos extranjeros que contaran con concesión del gobierno federal, como se aprecia de dichas normas transitorias que en seguida se transcriben:

***"ARTÍCULO CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, dicten las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes..."***

**PREM  
JUSTICIA**

***"ARTÍCULO NOVENO.- El ejecutivo Federal en un plazo de 180 días naturales, a partir de la vigencia de esta Ley, expedirá los decretos mediante los cuales se transforman las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas en sociedades nacionales de crédito, como instituciones de banca de desarrollo.***

***"Los decretos que expida el Ejecutivo Federal se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se inscribirán en el Registro Público de Comercio, debiendo especificar la fecha en que se producirá la transformación de la sociedad de que se trata, para todos los efectos legales, los accionistas***



"dentro de las limitaciones establecidas por esta  
"Ley, podrán solicitar el canje de acciones por  
"certificados de aportación patrimonial o separarse  
"de la sociedad y obtener el reembolso de sus  
"títulos a su valor en libros, según el último estado  
"financiero aprobado, siempre que lo soliciten  
"dentro de los noventa días.

"Al producirse la transformación quedan  
"reformadas las leyes orgánicas respectivas,  
"incluyendo la Ley General de Crédito Rural, en  
"aquellos artículos en los que se señala que las  
"instituciones nacionales de crédito, son  
"sociedades anónimas y aquellas otras que  
"determinan que el capital estará representado por  
"acciones y las autoriza a emitirlas.

"Las sociedades nacionales de crédito,  
"instituciones de banca de desarrollo, se regirán  
"por esta Ley y sus respectivas leyes orgánicas  
"incluyendo la Ley General de Crédito Rural. Las  
"sociedades que no cuenten con Ley Orgánica se  
"regirán por esta Ley y las disposiciones  
"administrativas que dicte la Secretaría de  
"Hacienda y Crédito Público, en tanto el Congreso  
"de la Unión expide las Leyes orgánicas  
"respectivas.



*"Mientras que se llevan a cabo las transformaciones previstas en este precepto, continuarán siendo aplicables a las disposiciones vigentes de esta Ley, debiendo el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveer lo necesario a efecto de que las instituciones a que se refiere el presente artículo continúen prestando de manera adecuada y eficiente el servicio público de banca y crédito."*

*"ARTÍCULO DÉCIMO.- El Banco Obrero, S.A., y las sucursales en México de banco extranjeros que cuenten con concesión del Gobierno Federal, continuarán rigiéndose por las disposiciones conforme a las cuales vienen operando."*

De los anteriores dispositivos se sigue que si bien es cierto que el artículo segundo transitorio de la Ley Bancaria de 1985 derogó a la Ley de Instituciones de Crédito de 1941 y a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1982, sin embargo, no debe pasar inadvertido que la primera de ellas, no regulaba a las Instituciones Nacionales de Crédito y, la segunda ley remitió, en cuanto a la regulación de los intermediarios financieros a la ley de 1941; no obstante, el artículo tercero transitorio de la ley de 1982, dispuso que las instituciones nacionales de crédito (existentes antes de la





expropiación bancaria) seguirían rigiéndose por las normas conforme a las cuales venían operando.

Las normas transitorias de la Ley Bancaria de 1985, en primer término derogaron a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941 y la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1982, en segundo término, las instituciones nacionales de crédito constituidas como sociedades anónimas serían transformadas a sociedades nacionales de crédito, como instituciones de banca de desarrollo, quedando al momento de la transformación reformadas sus leyes orgánicas en los aspectos relacionados con su capital y de que en adelante serían sociedades nacionales de crédito y no sociedades anónimas y, en cuanto a su funcionamiento seguirían rigiéndose por sus respectivas leyes orgánicas y por la nueva ley. Además, si hubiere alguna institución nacional de crédito que no contara con ley orgánica, en tanto ésta se emitiera, se regiría por la ley reglamentaria del servicio público de la banca y crédito.

Como se señala en argumentaciones anteriores, la Ley Bancaria de 1985, contiene diversos preceptos que normaron la actuación de la banca de desarrollo y, así, en el artículo 31 se le atribuyó la posibilidad de realizar, además de la actividades propias para su desarrollo, aquellas previstas para las instituciones de banca múltiple, entre ellas: la de otorgar préstamos o créditos; promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y conservar

acciones o partes de interés en las mismas (salvo que se tratara de empresas que les prestaran servicios complementarios o auxiliares, en cuyo caso, requerían autorización de la Secretaría de Hacienda, artículo 68); llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas y; asumir obligaciones por cuenta de terceros; así, incluso para conceder préstamos para pago de pasivos en los créditos refaccionarios (artículo 50-V).

También en esta ley se sujetó a las instituciones nacionales de crédito a: utilizar los servicios de comisionistas o intermediarios autorizados por la Comisión Nacional Bancaria (artículo 70); para el otorgamiento de crédito, en cuanto a documentación e información requerida, debían sujetarse a la normatividad que emitiera la mencionada comisión (artículo 71); en cuanto a propaganda y publicidad debían sujetarse a las reglas que emitiera la Secretaría de Hacienda (artículo 74); medidas de seguridad para sus instalaciones (artículo 76); suspensión de labores (artículo 75).

De lo anterior se desprende que las prohibiciones contenidas en el artículo 8º del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, quedaron derogados por virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito de 1984 y en vigor a partir del día quince de enero del año siguiente, que autorizaron a las instituciones



nacionales de crédito (banca de desarrollo) para realizar las operaciones antes prohibidas.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º del Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto dispone que: ***"La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior."***

Resulta aplicable en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

***"LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS. El carácter propio de la ley, aunque no reside en su generalidad ni en la impersonalidad de las ordenes que da, ya que ese carácter puede tenerlo también los reglamentos, si consiste en el hecho de que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante los congresos, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar, así como las leyes deben circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva,***



*"según nuestro régimen constitucional. Algún  
"tratadista, dice que la ley es una regla general  
"escrita, a consecuencia de una operación de  
"procedimiento, que hace intervenir a los  
"representantes de la nación, que declara  
"obligatorias las relaciones sociales que derivan de  
"la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde  
"el punto de vista de la libertad; el reglamento es  
"una manifestación de voluntad, bajo la forma de  
"regla general, emitida por una autoridad que tiene  
"el poder reglamentario y que tiende a la  
"organización y a la policía del estado, con un  
"espíritu a la vez constructivo y autoritario; (hasta  
"aquí el tratadista). Cuando mucho, se podrá  
"admitir que el reglamento, desde el punto de vista  
"material, es un acto legislativo, pero nunca puede  
"serlo bajo el aspecto formal, ni por tener materias  
"que están reservadas a la ley, o sea actos que  
"puedan emanar de la facultad que corresponde al  
"poder legislativo, porque desaparecería el régimen  
"constitucional de separación de funciones. La ley  
"tiene cierta preferencia, que consiste en que sus  
"disposiciones no pueden ser modificadas por un  
"reglamento. Este principio es reconocido en el  
"inciso 'f' del artículo 72 de la Constitución, que  
"previene que en la interpretación, reforma o  
"derogación de las leyes o decretos, se observaran  
"los mismos trámites establecidos para su*





"formación. Conforme a la misma Constitución, hay  
"materias que solo pueden ser reguladas por una  
"ley. La reglamentación de las garantías  
"individuales sólo puede hacerse, salvo casos  
"excepcionales, por medio de una ley, en sentido  
"formal; del mismo modo que se necesita una ley  
"para imponer contribuciones y penas para  
"organizar la guardia nacional, etc. de modo que si  
"bien existen algunas relaciones entre el  
"reglamento y la ley, no pueden tener ambos el  
"mismo alcance, ni por razón del órgano que los  
"expide, ni por razón de la materia que consignan,  
"ni por la fuerza y autonomía que en sí tienen, ya  
"que el reglamento tiene que estar necesariamente  
"subordinado a la ley, de lo cual depende su  
"validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y  
"restringir el contenido de la misma, ya que sólo  
"tiene por objeto proveer a la exacta observancia  
"las leyes que expide el Congreso de la Unión, de  
"donde se deduce que si el artículo 4to.  
"constitucional exige una ley previa para que se  
"restrinja la libertad de comercio y trabajo y la ley  
"que establece la restricción no es más que un  
"reglamento, como los artículos constitucionales  
"no pueden ser reglamentados sino por una ley,  
"está fuera de duda que la reglamentación  
"administrativa está en pugna con la Constitución,  
"pues el artículo 89, fracción I, de la Constitución

***"vigente, sólo establece la facultad reglamentaria  
"por lo que hace a las leyes expedidas por el  
"Congreso de la Unión, y el mismo espíritu imperó  
"en todas las constituciones anteriores." (Segunda  
Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta  
Epoca; Tomo LXXII, página 6715).***

Finalmente, conviene destacar que la mencionada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de mil novecientos ochenta y cinco, fue abrogada, a su vez, por el artículo segundo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, ordenamiento jurídico que en sus artículos 46, fracción VI y 106, establece lo siguiente:

***"Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo  
"podrán realizar las operaciones siguientes: ...***

***"...VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o  
"créditos..."***

***"Artículo 106.- A la instituciones de crédito les  
"estará prohibido:***

***"I. Dar en garantía sus propiedades;***

***"II. Dar en prenda los títulos o valores de su  
"cartera, salvo que se trate de operaciones con el***



*"Banco de México, con las instituciones de banca  
"de desarrollo, con el Fondo Bancario de  
"Protección al Ahorro y los fideicomisos públicos  
"constituidos por el Gobierno Federal para el  
"fomento económico;*

*"III. Dar en garantía títulos de crédito que emitan,  
"acepten o conserven en tesorería;*

*"IV. Operar sobre los títulos representativos de su  
"capital, salvo lo dispuesto por el último párrafo de  
"los artículos 19 y 38, y por el artículo 122 de esta  
"Ley, así como otorgar créditos para la adquisición  
"de tales títulos;*

*"V. Celebrar operaciones y otorgar servicios con su  
"clientela en los que se pacten condiciones y  
"términos que se aparten de manera significativa  
"de las condiciones de mercado prevalecientes en  
"el momento de su otorgamiento, de las políticas  
"generales de la institución, y de las sanas  
"prácticas y usos bancarios;*

*"VI. Celebrar operaciones en virtud de las cuales  
"resulten o puedan resultar deudores de la  
"institución sus funcionarios y empleados, salvo  
"que corresponda a prestaciones de carácter  
"laboral otorgadas de manera general; los*

"comisarios propietarios o suplentes; los auditores  
"externos de la institución; o los ascendientes o  
"descendientes en primer grado o cónyuges de las  
"personas anteriormente señaladas. La Secretaría  
"de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar  
"excepciones a lo dispuesto en esta fracción,  
"mediante reglas de carácter general;

"VII. Aceptar o pagar documentos o certificar  
"cheques en descubierto, salvo en los casos de  
"apertura de crédito;

"VIII. Contraer responsabilidades u obligaciones  
"por cuenta de terceros, distintas de las previstas  
"en la fracción VIII del artículo 46 de esta Ley y con  
"la salvedad a que se contrae la siguiente fracción;

"IX. Otorgar fianzas o cauciones, salvo cuando no  
"puedan ser atendidas por las instituciones de  
"fianzas, en virtud de su cuantía y previa  
"autorización de la Secretaría de Hacienda y  
"Crédito Público. Las garantías a que se refiere  
"esta fracción habrán de ser por cantidad  
"determinada y exigirán contragarantía en efectivo  
"o en valores de los que puedan adquirir las  
"instituciones de crédito conforme a esta Ley;





"X. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones  
"derivadas de los documentos domiciliados, al  
"ceder su domicilio para pagos o notificaciones.  
"Esta disposición deberá hacerse constar en el  
"texto de los documentos en los cuales se exprese  
"el domicilio convencional;

"XI. Comerciar con mercancías de cualquier clase,  
"excepto las operaciones con oro, plata y divisas  
"que puedan realizar en los términos de la presente  
"Ley y de la Ley Orgánica del Banco de México;

"XII. Participar en sociedades que no sean de  
"responsabilidad limitada y explotar por su cuenta  
"establecimientos mercantiles o industriales o  
"fincas rústicas, sin perjuicio de la facultad de  
"poseer bonos, obligaciones, acciones u otros  
"títulos de dichas empresas conforme a lo previsto  
"en esta Ley. La Comisión Nacional Bancaria,  
"podrá autorizar que continúen su explotación,  
"cuando las reciban en pago de créditos o para  
"aseguramiento de los ya concertados, sin exceder  
"los plazos a que se refiere la fracción siguiente;

"XIII. Adquirir con recursos provenientes de sus  
"pasivos, títulos, valores, o bienes de los  
"señalados en las fracciones I y III del artículo 55  
"de esta Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito

*"Público, podrá autorizar excepciones, mediante  
"reglas de carácter general.*

*"Cuando una institución de crédito reciba en pago  
"de adeudos o por adjudicación en remate dentro  
"de juicios relacionados con créditos a su favor,  
"títulos o valores, que no deba conservar en su  
"activo, así como bienes o derechos de los  
"señalados en esta fracción, deberá sujetarse a las  
"disposiciones de carácter general que establezca  
"la Comisión Nacional Bancaria;*

*"XIV. Mantener cuentas de cheques a aquellas  
"personas que en el curso de dos meses, hayan  
"librado tres o más de dichos documentos, que  
"presentados en tiempo no hubieren sido pagados  
"por falta de fondos disponibles y suficientes, a no  
"ser que esta falta de fondos se deba a causa no  
"imputable al librador.*

*"Cuando alguna persona incurra en la situación  
"anterior, las instituciones darán a conocer a la  
"Comisión Nacional Bancaria el nombre de la  
"misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a  
"conocer a todas las instituciones de crédito del  
"país, las que en un periodo de un año no podrán  
"abrirle cuenta. El interesado podrá acudir ante la*



"citada Comisión a manifestar lo que a su derecho  
"corresponda;

"XV. Pagar anticipadamente, en todo o en parte,  
"obligaciones a su cargo derivadas de depósitos  
"bancarios de dinero, préstamos o créditos, bonos,  
"obligaciones subordinadas o reportes;

"XVI. Adquirir títulos o valores emitidos o  
"aceptados por ellas o por otras instituciones de  
"crédito; así como readquirir otros títulos, valores  
"o créditos a cargo de terceros que hubieren  
"cedido, salvo el caso de las operaciones de  
"reporto y de las previstas en el artículo 93 de esta  
"Ley;

"XVII. Otorgar créditos o préstamos con garantía  
"de:

"a) Los pasivos a que se refieren las fracciones I,  
"incisos b), c) y d) y II a IV del artículo 46 de esta  
"Ley, a su cargo o de cualquier institución de  
"crédito, y

"b) Derechos sobre fideicomisos, mandatos o  
"comisiones que, a su vez, tengan por objeto los  
"pasivos mencionados en el inciso anterior;

"c) Acciones de entidades financieras o sociedades  
"controladoras de grupos financieros, salvo que  
"cuenten con la autorización previa de la Secretaría  
"de Hacienda y Crédito Público, quien para resolver  
"oír la opinión del Banco de México y de la  
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"XVIII. Celebrar operaciones bancarias activas o  
"pasivas, por un plazo mayor de veinte años, sea  
"cual fuere la forma de documentar las mismas, y

"XIX. En la realización de las operaciones a que se  
"refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley:

"a) Celebrar operaciones con la propia institución  
"en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o  
"comisiones. El Banco de México podrá autorizar,  
"mediante disposiciones de carácter general, la  
"realización de determinadas operaciones cuando  
"no impliquen un conflicto de intereses;

"b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o  
"comitentes, del incumplimiento de los deudores,  
"por los créditos que se otorguen o de los  
"emisores, por los valores que se adquieran, salvo  
"que sea por su culpa, según lo dispuesto en la  
"parte final del artículo 356 de la Ley General de





"Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la  
"percepción de rendimientos por los fondos cuya  
"inversión se les encomiende.

"Si al término del fideicomiso, mandato o comisión  
"constituidos para el otorgamiento de créditos,  
"éstos no hubieren sido liquidados por los  
"deudores, la institución deberá transferirlos al  
"fideicomitente o fideicomisario, según el caso, o al  
"mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su  
"importe.

"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los  
"dos párrafos anteriores, no producirá efecto legal  
"ninguno.

"En los contratos de fideicomiso, mandato o  
"comisión se insertarán en forma notoria los  
"párrafos anteriores de este inciso y una  
"declaración de la fiduciaria en el sentido de que  
"hizo saber inequívocamente su contenido a las  
"personas de quienes haya recibido bienes para su  
"inversión;

"c) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos,  
"mandatos o comisiones destinados al  
"otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria  
"tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento

*"de los mismos para realizar operaciones en virtud  
"de los cuales resulten o puedan resultar deudores  
"sus delegados fiduciarios; los miembros del  
"consejo de administración o consejo directivo,  
"según corresponda, tanto propietarios como  
"suplentes, estén o no en funciones; los  
"empleados y funcionarios de la institución; los  
"comisarios propietarios o suplentes, estén o no en  
"funciones; los auditores externos de la  
"institución; los miembros del comité técnico del  
"fideicomiso respectivo; los ascendientes o  
"descendientes en primer grado o cónyuges de las  
"personas citadas, las sociedades en cuyas  
"asambleas tengan mayoría dichas personas o las  
"mismas instituciones, asimismo aquellas  
"personas que el Banco de México determine  
"mediante disposiciones de carácter general, y*

*"d) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan  
"recibido la administración para distribuir el  
"patrimonio entre herederos, legatarios, asociados  
"o acreedores, o para pagar una obligación o para  
"garantizar su cumplimiento con el valor de la  
"misma finca o de sus productos, y sin que en  
"estos casos la administración exceda del plazo de  
"dos años.*



*"El Banco de México podrá autorizar, mediante reglas generales, excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, con vistas a propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, y a lo previsto en las fracciones XV a XVIII a fin de procurar la captación de recursos por las instituciones o regular la celebración de operaciones, en los términos más adecuados a la situación del mercado o del sistema bancario.*

*"La Comisión Nacional Bancaria podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, siempre y cuando sea para coadyuvar a la estabilidad de las instituciones de crédito o del sistema bancario".*

De la transcripción precedente se advierte con toda claridad, que la Ley de Instituciones de Crédito que constituye el ordenamiento jurídico vigente y por tanto aplicable a las instituciones de banca múltiple, como lo son las involucradas en la presente contradicción a tesis, faculta expresamente a las citadas instituciones de crédito para otorgar préstamos o créditos; en la inteligencia de que el precitado artículo 106, que establece las prohibiciones a las que están sujetas dichas instituciones, en ninguna de sus fracciones prohíbe a tales organismos otorgar financiamientos para el pago de pasivos; por lo que debe concluirse que en la especie el artículo 8º, inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales del Crédito, publicado en el Diario Oficial



del veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, es inaplicable por las razones indicadas, a los contratos de apertura de crédito en los que se otorga un crédito adicional para el pago de pasivos.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en este tema debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto a continuación se indican:

**"APERTURA DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE  
"PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO  
"CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PARA  
"TAL FIN, NO ESTÁ REGIDO POR EL  
"REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES  
"NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES  
"NACIONALES DE CRÉDITO, NI ES CONTRARIO A  
"LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuando  
"en la celebración de un contrato de apertura de  
"crédito, las partes convienen a la vez un crédito  
"adicional que permita al acreditado, de serle  
"necesario, cubrir el importe de los intereses a su  
"cargo, evidentemente se está en presencia de un  
"crédito para el pago de pasivos, operación que se  
"encontraba prohibida por el artículo 8°, inciso b),  
"del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales  
"y Organizaciones Auxiliares Nacionales de  
"Crédito; sin embargo, tal disposición no resulta**





*"aplicable a la hipótesis examinada, en virtud de que, por una parte, en el propio artículo se restringió su aplicación exclusivamente a las instituciones que actualmente se conocen como banca de desarrollo, y a las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, por lo que tal precepto nunca fue aplicable a la banca comercial, conocida actualmente como banca múltiple. Asimismo, debe resaltarse que el artículo 46, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito, faculta a dichas instituciones para otorgar préstamos o créditos, y el artículo 106 de la propia ley que establece cuáles son las actividades prohibidas a tales instituciones, no contempla la prohibición de referencia".*

**SÉPTIMO.-** Como otro tema de contradicción denunciado por el Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte, se plantea si resulta nula la cláusula pactada en un contrato de apertura de crédito, que prevé un crédito adicional para aplicación a intereses, porque la institución de crédito que la otorga, en términos del artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, no estimó la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de su recuperación, las relaciones que guardan entre sí los distintos conceptos de los estados financieros y la situación económica de los acreditados.

En efecto, el tema de la denuncia a tratar quedó enunciado de la siguiente forma:

***“¿ES NULA LA CLÁUSULA PACTADA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, QUE PREVE UN CRÉDITO ADICIONAL PARA APLICACIÓN DE INTERESES, SI LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO QUE LA OTORGA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, NO ESTIMÓ LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RESPECTIVOS, LOS PLAZOS DE SU RECUPERACIÓN, LAS RELACIONES QUE GUARDEN ENTRE SÍ LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS O LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS ACREDITADOS?”***

Es pertinente señalar que no participan en esta contradicción los criterios expresados por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, en su ejecutoria número **4135/97** (correspondiente al número 20 del legajo), Octavo en Materia Civil del Primer Circuito en su sentencia número **681/97** (número 42 del legajo) y Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en su resolución número **8049/97** (número 49 del legajo), los cuales se ocupan del análisis de la **teoría de la imprevisión**, arribando a la **conclusión de que es inaplicable por la vía jurisdiccional en el sistema jurídico mexicano** pues, en todo caso, señalan,



puede acudir a ella mediante la creación por parte del legislador de normas generales que atemperen las obligaciones contractuales.

Así es, los mencionados tribunales sostienen criterios coincidentes; lo anterior se comprueba con la transcripción de la parte relativa de las consideraciones vertidas por los citados tribunales, al resolver los respectivos juicios de amparo directo civil que se insertan a continuación:

*"Con independencia de lo dicho, cabe decir que asistió razón a la sala responsable, pues efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el criterio de que en materia civil el artículo 1796 Del Código Civil para el Distrito Federal (similar al 78 del Código de Comercio) establece que en los contratos, las partes se obligan al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y además, a las consecuencias que de aquéllos se deriven; que por tanto, de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la economía de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se podrán modificar las condiciones de los contratos relativos, pero que ello tendría que ser mediante disposiciones de carácter general.---Los criterios que sustentan lo dicho fueron expuestos por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte*



"de Justicia de la Nación, en las tesis consultables,  
 "la primera, en la página 29 del Semanario Judicial  
 "de la Federación Séptima Época, Tomo 139-144,  
 "cuarta parte, y la segunda, en la página 35 del  
 "Semanario y época señalados, Tomo 193-198,  
 "cuarta parte, que en el orden indicado dicen: ---  
 " 'CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA  
 "DE LA IMPREVISION EN LOS.- El artículo 1625 del  
 "Código Civil del Estado de México, igual al 1796  
 "del Código Civil del Distrito Federal,  
 "supletoriamente aplicado (tratándose de una  
 "compraventa mercantil), siguiendo el sistema  
 "rígido de los contratos, acorde con el principio  
 "relativo a los efectos de la declaración de  
 "voluntad, dispone que aquéllos obligan a las  
 "partes al exacto cumplimiento de las prestaciones  
 "expresamente pactadas, y además, a las  
 "consecuencias que de los mismos se deriven,  
 "según su naturaleza, conforme a la buena fe, al  
 "uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones,  
 "no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la  
 "teoría de la imprevisión en razón de esa buena fe,  
 "que obviamente constituye un principio general de  
 "derecho, pues precisamente, con base en ella, el  
 "obligado debe conducirse como persona  
 "consciente de su responsabilidad en el  
 "cumplimiento cabal de sus obligaciones,  
 "cualquiera que resulte la magnitud de su





"contenido, aun cuando sobrevengan  
"acontecimientos que no se previeron o no  
"pudieron preverse y que la modifiquen, como lo  
"estima don Trinidad García en su <<Teoría de la  
"Imprevisión en los Contratos bajo el Régimen de  
"Derecho Civil y del Common Law>>, máxime si se  
"toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido  
"en el artículo 385 del Código de Comercio, las  
"ventas de naturaleza mercantil no se rescinden  
"aun por causa de lesión, sin que ello impida, por  
"otra parte, que de existir causas imprevisibles que  
"alteren fundamentalmente la economía de un  
"determinado grupo social, no apreciado por las  
"partes, se modifiquen las condiciones de los  
"contratos relativos, mediante disposiciones de  
"carácter general". 'CONTRATOS.

"INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA DE LA  
"IMPREVISION.- El artículo 1796 del Código Civil  
"del Distrito Federal, supletoriamente aplicado,  
"siguiendo el sistema rígido de los contratos,  
"acorde con el principio relativo a los efectos de la  
"declaración de voluntad, dispone que aquéllos  
"obligan a las partes al exacto cumplimiento de las  
"prestaciones expresamente pactadas, y además, a  
"las consecuencias que de los mismos se deriven,  
"según su naturaleza, conforme a la buena fe, al  
"uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones,  
"no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la

"teoría de la imprevisión en razón de esa buena fe,  
 "que obviamente constituye un principio general de  
 "derecho, pues precisamente, con base en ella, el  
 "obligado debe conducirse como persona  
 "consciente de su responsabilidad en el  
 "cumplimiento cabal de sus obligaciones  
 "cualquiera que resulte la magnitud de su  
 "contenido, aun cuando sobrevengan  
 "acontecimientos que no se previeron o no  
 "pudieron preverse y que la modifiquen, sin que  
 "ello impida, por otra parte, que de existir causas  
 "imprevisibles que alteren fundamentalmente la  
 "economía de un determinado grupo social, no  
 "apreciado por las partes, se modifiquen las  
 "condiciones de los contratos relativos, mediante  
 "disposiciones de carácter general'.--- Lo anterior  
 "significa que la imprevisión en los contratos como  
 "forma de modificar las condiciones en ellos  
 "pactadas, sólo puede tener aplicación mediante  
 "disposiciones de carácter general, pues tanto la  
 "Legislación Civil para el Distrito Federal (artículo  
 "1796) como la codificación mercantil (artículo 78  
 "Código de Comercio) obligan a las partes en el  
 "contrato a cumplir con las obligaciones  
 "expresamente pactadas y desde luego a las  
 "consecuencias que ello origine". (amparo directo  
 civil 4135/97 del Quinto Tribunal Colegiado en materia



Civil del Primer Circuito, identificado con el número 20 del legajo).

"Por otro lado, tratándose de contratos  
"mercantiles que siguen el sistema rígido de los  
"contratos, acorde con el principio relativo a los  
"efectos de la declaración de voluntad, dispone  
"que aquellos obligan a las partes al exacto  
"cumplimiento de las prestaciones expresamente  
"pactadas y además, a las consecuencias que de  
"los mismos se deriven, según su naturaleza,  
"conforme a la buena fe, al uso o al ley, conforme a  
"lo dispuesto por el artículo 78 del Código de  
"Comercio, precepto que no deja lugar a su  
"interpretación a fin de aplicar la teoría de la  
"imprevisión en razón de la buena fe, que  
"obviamente constituye un principio general de  
"derecho, pues precisamente, con base en ella, el  
"obligado debe conducirse como persona  
"consciente de su responsabilidad en el  
"cumplimiento cabal de sus obligaciones,  
"cualquiera que resulte de la magnitud de su  
"contenido, aun cuando sobrevengan  
"acontecimientos que no se previeron a no  
"pudieron preverse y que la modifiquen; como  
"sucedió, que cuando se celebró el contrato básico  
"(seis de agosto de mil novecientos noventa y dos),  
"existía diversa situación económica en el país, y



"que posteriormente hayan variado esas  
"condiciones y se hubieran elevados  
"considerablemente los intereses, pues ello fue  
"debido a causas externas no imputables a las  
"partes contratantes y por el cual se vio afectada  
"toda la población, incluyendo al banco  
"demandado; por lo que, ello no da causa a la  
"nulidad de las citadas cláusulas, precisamente por  
"la libertad contractual y el principio de buena fe;  
"sino en todo caso, sería motivo de que se  
"modificaran los contratos relativos mediante  
"disposiciones de carácter general.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada  
"por la Tercera Sala de la Suprema Corte de  
"Justicia de la Nación, publicada en el informe  
"correspondiente al año de mil novecientos  
"ochenta, Tercera Sala, tesis veinticinco, página  
"treinta y uno, cuyo texto expresa:

" 'CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA  
"DE LA IMPREVISION EN LOS.- El artículo 1625 del  
"Código Civil del Estado de México, igual al 1796  
"del Código Civil del Distrito Federal,  
"supletoriamente aplicado (tratándose de una  
"compraventa mercantil), siguiendo el sistema  
"rígido de los contratos, acorde con el principio  
"relativo a los efectos de la declaración de





"voluntad, dispone que aquellos obligan a las  
"partes al exacto cumplimiento de las prestaciones  
"expresamente pactadas, y además, a las  
"consecuencias que de los mismos se deriven,  
"según su naturaleza, conforme a la buena fe, al  
"uso o la ley, precepto que, en esas condiciones,  
"no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la  
"teoría de la imprevisión en razón de esa buena fe,  
"que obviamente constituye un principio general de  
"derecho, pues precisamente, con base en ella, el  
"obligado debe conducirse como persona  
"consciente de su responsabilidad en el  
"cumplimiento cabal de sus obligaciones,  
"cualquiera que resulte la magnitud de su  
"contenido, aun cuando se sobrevengan  
"acontecimientos que no se previeron o no  
"pudieron preverse y que la modifiquen, como lo  
"estima don Trinidad García en su Teoría de la  
"Imprevisión en los contratos bajo el régimen de  
"Derecho Civil y del Common Law, máxime si se  
"toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido  
"en el artículo 385 del Código de Comercio, las  
"ventas de naturaleza mercantil no se rescinden  
"aun por causa de lesión, sin que ello impida, por  
"otra parte, que de existir causas imprevisibles que  
"alteren fundamentalmente la economía de un  
"determinado grupo social, no apreciado por las  
"partes, se modifiquen las condiciones de los

*"contratos relativos mediante disposiciones de carácter general."* (amparo directo civil 681/97, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al número 42 del legajo).

*"Por lo que se refiere a la teoría de la imprevisión, que a criterio de la quejosa debió tomarse en consideración no sólo para reducir intereses, sino para declarar nulo el convenio de reconocimiento de adeudo y el modificadorio, debe decirse que el tribunal de apelación no puede fundar sus fallos en base a la teoría indicada, porque el permitirse la intervención judicial para modificar la voluntad de las partes, plasmada en un contrato, sería contrario a la seguridad jurídica, a la estabilidad contractual y vulneraría el principio en que descansa la autonomía de la voluntad. Además, frente a la teoría mencionada, cobra vigencia la regla 'pacta sunt servanda', que contiene una tesis adversa, en el sentido de que los contratos deben cumplirse aunque las circunstancias cambien, pues ni la buena fe, ni la equidad, sirven de base para adoptar la anterior máxima; regla que ha sido aceptada, en términos generales, por el Código Civil, al establecer, por ejemplo, en el artículo 1797, lo siguiente: 'La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes', y si bien es*



193

*"verdad que el mismo código, respecto de esta regla general, ha establecido excepciones como las que aparecen en el artículo 2255, ello quiere decir que en nuestro sistema jurídico toca al legislador y no al juez modificar, por conceptos de observancia general, las condiciones de los contratos en circunstancias extraordinarias."*

(Amparo directo civil 8049/97, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, marcado con el número 49 del legajo).

Ninguna de las ejecutorias referidas en la denuncia de contradicción de tesis contiene un criterio incompatible con el invocado en las consideraciones supratranscritas, de suerte tal, que resulta procedente declarar que no hay contradicción de tesis, ya que el señalado grupo de ejecutorias contienen un criterio coincidente, el cual no fue rebatido por ninguna otra ejecutoria de las confrontadas en este asunto, y no abordan, menos aún sostienen criterio sobre el tema de la nulidad o no del crédito otorgado, sin la previa elaboración del proyecto de viabilidad económica a que se contrae el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, debe establecerse, por tanto, que no forman parte de la contradicción de tesis que se analiza.

Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo número 654/96 (número 106 del legajo), resuelto en sesión celebrada el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, sostiene en sus



consideraciones el tema de la situación financiera que se vivió después de la crisis de mil novecientos noventa y cuatro, estableciendo que no constituían caso fortuito o fuerza mayor, figuras conforme a las cuales se dispensa el cumplimiento de las obligaciones.

Las consideraciones de donde emerge tal planteamiento, en lo conducente señalan:

*"En el segundo concepto de violación se aduce  
 "que la Sala responsable incorrectamente  
 "consideró que la devaluación monetaria sufrida en  
 "el país durante el mes de diciembre de mil  
 "novecientos noventa y cuatro, no constituía un  
 "caso fortuito que había hecho imposible el  
 "cumplimiento de las obligaciones derivadas del  
 "contrato crediticio de que se trata, lo cual es  
 "inexacto, a decir de los impetrantes, porque los  
 "efectos de dicho fenómeno económico carecen de  
 "estimación en cuanto a su duración y daño,  
 "siendo un hecho notorio que debido a tal  
 "desquiciamiento financiero, diversas empresas en  
 "el país resultaron 'quebradas' (sic) en su  
 "economía; y, que dicha ad quem, de manera  
 "deficiente, había considerado como sinónimos los  
 "conceptos 'fuerza mayor' y 'caso fortuito'. Lo  
 "anterior resulta infundado, si se toma en  
 "consideración que como lo consideró la emisora*





"del fallo reclamado, aun cuando la depreciación  
"de la moneda nacional propició el aumento en los  
"índices de inflación y desde luego elevó el costo  
"del dinero o tasas de interés, lo cual dificultó el  
"cumplimiento de las obligaciones contraídas con  
"las instituciones bancarias, no por ese solo hecho  
"puede aseverarse que dicha devaluación importa  
"un caso fortuito o fuerza mayor que hubiera  
"tornado imposible la realización del pago de las  
"amortizaciones derivadas del acuerdo de  
"voluntades suscrito entre los quejosos y el banco  
"tercero perjudicado, habida cuenta que de  
"conformidad con el Diccionario Jurídico Mexicano  
"del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la  
"Universidad Nacional Autónoma de México,  
"Editorial Porrúa, Octava Edición, México, 1995,  
"páginas cuatrocientos treinta vuelta a  
"cuatrocientos treinta y una vuelta, el caso fortuito  
"o fuerza mayor presenta los siguientes caracteres:  
"a).- Debe ser irresistible; b) Imprevisible; y,  
"c).- Exterior, es decir, debe producirse fuera de la  
"esfera de responsabilidad del deudor.--- De lo  
"anterior se sigue que, contrario a lo alegado, la  
"devaluación de la moneda en México no puede  
"equipararse a un caso fortuito, por no resultar un  
"hecho irresistible, entendido como tal la  
"imposibilidad absoluta y no una simple dificultad  
"en el cumplimiento de una obligación.

*"Ciertamente, el estado de desorden económico en  
 "comento, no está acreditado que impidiera que los  
 "acreditados hoy quejosos, satisficieran el  
 "compromiso a su cargo, consistente en el pago de  
 "las parcialidades del crédito que se les otorgó,  
 "sino, resulta evidente que hizo más difícil el  
 "cumplimiento de esas obligaciones, máxime que,  
 "como los propios amparistas lo destacan en sus  
 "motivos de agravio, a iniciativa del gobierno  
 "federal se estableció un programa de apoyo a los  
 "deudores de la banca, por cuya virtud se  
 "renegociaron los créditos celebrados antes de la  
 "fecha en que aconteció la devaluación, de tal  
 "suerte que con base en esas medidas, se hizo  
 "posible la continuidad en el cumplimiento de las  
 "obligaciones a cargo de los acreditados. Así, al  
 "margen de la discrepancia doctrinaria existente  
 "entre los términos 'fuerza mayor' y 'caso fortuito',  
 "se desprende que devienen infundadas las  
 "argumentaciones que se analizan pues la  
 "devaluación de nuestra moneda, en modo alguno  
 "está demostrado que impidiera el cumplimiento en  
 "el pago de las amortizaciones, siquiera de capital  
 "como lo destacó la Sala, por parte de los ahora  
 "impetrantes." (Amparo directo civil 654/96, del  
 Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo  
 Circuito, marcado con el número 106 del legajo).*



Así, como en tal ejecutoria no se aborda y menos aún se inclina hacia uno de los dos criterios opuestos, es decir, sobre la nulidad o no del crédito otorgado sin la previa elaboración del proyecto de viabilidad económica a que se refiere el multicitado artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito; ni, por otro lado, existe criterio encontrado a sus consideraciones que versan sobre el caso fortuito o fuerza mayor para liberar de las obligaciones contractuales a los deudores de la banca, dado que su cumplimiento derivó en una imposibilidad para cumplir a raíz de la devaluación monetaria de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, debe concluirse que no existe contradicción de tesis sobre ese punto.

En cambio, existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Séptimo (4457/97, [número 31 del legajo], 4507/97 [número 32 del legajo], 6397/97 [número 34 del legajo], 10037/97 [número 36 del legajo], 1887/98 [número 38 del legajo]) y Octavo (328/98 [número 45 del legajo]) en Materia Civil del Primer Circuito, frente a los criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (en los asuntos números 439/98 [número 70 del legajo] y 463/98 [número 71 del legajo]) y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (asuntos números 1412/97 [número 197 del legajo] y 1741/97 [número 200 del legajo]).

Los Tribunales Colegiados Séptimo y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, que se inclinan por considerar que la



existencia del proyecto de viabilidad económica, constituye una condición indispensable del contrato, formulan en términos generales, los siguientes razonamientos:

a) El esquema financiero diseñado en el contrato base de la acción, se aparta de lo previsto en los artículos 4º, 49, 77, 106, fracción V y 112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Crédito, por no haberse demostrado en autos el cumplimiento del requisito previo al otorgamiento del crédito, consistente en la debida estimación de viabilidad económica o proyecto de viabilidad económica del acreditado, previsto en el artículo 65 de la ley invocada, pues los bancos en acatamiento a la sana práctica bancaria, tienen la obligación legal de cuidar que las condiciones de los créditos, como son los montos, plazos, regímenes de amortización, etcétera, guarden una relación adecuada con la situación económica presente y previsible de los acreditados, según lo previene el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.

b) En términos del último precepto citado, se encomienda a la Comisión Nacional Bancaria la vigilancia del debido cumplimiento y el artículo 106, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, prohíbe a la banca celebrar operaciones pactadas en condiciones y términos que se aparten de manera significativa del mercado prevaleciente en el momento del otorgamiento, de las políticas generales de la institución y de las sanas prácticas y usos bancarios; además de que en términos del numeral 112, fracción V, incisos c) y d), de la citada ley, se





196

considera como un delito el que los empleados y funcionarios de los bancos otorguen créditos, o los renueven a sabiendas del estado de insolvencia del acreditado.

c) Es política bancaria derivada del citado artículo 65, que para que una persona pudiera ser sujeto de crédito, tenía que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establecían según el monto del crédito solicitado, de manera que la institución demandada para otorgar el financiamiento, estuvo constreñida a efectuar la estimación del proyecto de viabilidad económica y de los otros aspectos que guarda la disposición, procurando que las condiciones del crédito guardaran un sano equilibrio con la situación presente y previsible del acreditado conforme creciera la inflación.

Lo anterior se desprende del contenido de las partes relativas de las ejecutorias que se transcriben a continuación:

***"En el caso, el esquema financiero diseñado en el contrato base de la acción se aparta de lo previsto en los artículos 4º, 49, 77, 65, 106, fracción V y 112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Crédito.***

***"En primer término, al no estar demostrado el requisito de previo cumplimiento consistente en la debida estimación de viabilidad económica del***

*"crédito, impuesto por el artículo 65 reproducido  
"con antelación.*

*"En efecto, es política bancaria derivada de dicho  
"dispositivo legal, que para que una persona  
"pudiera ser sujeto de crédito, tenía que demostrar  
"ingresos suficientes que rebasaran en  
"determinada medida el importe del pago mensual,  
"que los propios bancos establecían según el  
"monto del crédito solicitado.*

*"De esta manera, se sigue que la institución  
"demandada, para otorgar el financiamiento,  
"estuvo constreñida a efectuar la estimación del  
"proyecto de viabilidad económica y de los otros  
"aspectos que marca la disposición, procurando  
"que las condiciones del crédito guardaran un sano  
"equilibrio con la situación presente y previsible de  
"los acreditados.*

*"En el caso, no está acreditado que se haya llevado  
"a cabo la estimación de ley del proyecto de  
"viabilidad económica, ni el estudio de la situación  
"presente y previsible de los acreditados, hoy  
"quejosos, condición indispensable para el  
"otorgamiento del financiamiento bancario y  
"principio fundamental que debió observarse a fin  
"de que el banco pudiera recuperar el crédito y*



"evitar situaciones de insolvencia y por ende, de  
"falta de pago, pues de haberlo hecho dada su  
"condición de experto financiero, hubiera advertido  
"la inviabilidad del crédito en las condiciones en  
"que fue otorgado.

"Para constatar lo antes dicho es pertinente  
"señalar, que la parte demandada mediante escrito  
"de dieciséis de mayo de mil novecientos noventa  
"y seis, que aparece a fojas ochenta y dos y  
"ochenta y tres del juicio natural, sólo ofreció como  
"pruebas de su parte la confesional de los actores;  
"la documental pública consistente en el  
"testimonio de la escritura pública número 11,336,  
"pasada ante la fe del licenciado Roberto Teutil  
"Otero, Notario Público número 161 del Distrito  
"Federal y sus anexos; la presuncional legal y  
"humana y la instrumental de actuaciones  
"consistente en todo lo actuado.

"Lo anterior, pone de manifiesto que la institución  
"crediticia tercero perjudicada, no probó haberse  
"apegado a las sanas prácticas y usos bancarios,  
"máxime si se toma en cuenta, según se verá más  
"adelante, que en forma por demás incongruente e  
"ilegal, desde el momento en que se pactó el  
"crédito en controversia, la institución bancaria  
"concedió un crédito adicional para cubrir los



*"intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio el banco consideró que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que los acreditados no iban a poder cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaban obligando."* (Amparo directo civil 4457/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el número 31 del legajo).

*"En ese orden de ideas se advierte que, el banco demandado incumplió con lo previsto por el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que no exhibió los documentos requeridos para ello, consistentes en el esquema financiero y el estudio socioeconómico que le practicó a la actora para determinar si era sujeto de crédito, y así poder estimar la viabilidad económica del proyecto de inversión, establecer el comportamiento del crédito, los pagos que tendrá que realizar la acreditada mensualmente y el plazo máximo en el cual se liberaría de su obligación contractual, lo que en la especie no aconteció."*

*"Máxime, que para demostrar la inviabilidad económica del crédito, la actora ofreció la pericial en materia de cálculos matemáticos financieros a*





198

"carga de [REDACTED] quien  
"concluyó: '...que, el contrato era inviable de  
"origen, puesto que no hay ninguna razón para  
"suponer que el acreditado iba a incrementar sus  
"ingresos de tres a cinco veces por encima del  
"ritmo de la inflación, para poder salvar el  
"compromiso que el método financiero planteado  
"en el contrato le impone y que se demuestra en  
"las **CORRIDAS FINANCIERAS** comentadas en este  
"estudio, elaborada previamente por el suscrito y  
"que sustenta este dictamen'. (fojas 152 a 163 del  
"expediente 2567/95).

"Conclusión que compartió el perito contable  
"nombrado en rebeldía por la parte demandada  
"[REDACTED] al emitir su  
"dictamen en el juicio natural, lo que en su parte  
"conducente se transcribe: 'Efectivamente el  
"esquema matemático contenido en el crédito  
"estudiado es inviable, porque en cualquier  
"circunstancia económica conduce inevitablemente  
"a la insolvencia de la actora, ya que no permite  
"que los abonos sean lo suficientemente grandes  
"como para que se dé una sana amortización. Tal y  
"como lo muestran los estudios presentados por la  
"actora con su demanda y que son avalados por el  
"que suscribe, por estar hechos conforme a las  
"fórmulas contenidas en el crédito en estudio y que

*"representan la estimación más razonable que del  
"mencionado crédito puede hacerse hacia el  
"futuro; estimación que se hace necesaria para  
"determinar si debe o no otorgarse dicho crédito'  
"(fojas 251 a 257 del expediente citado).*

*"Probanzas que la sala responsable en forma ilegal  
"desestimó, puesto que de tales dictámenes se  
"llega a la conclusión que el contrato de apertura  
"de crédito con interés y garantía celebrado entre  
"María del Carmen González Cortés y Banco  
"Mexicano, S.A., fue inviable desde su origen, ya  
"que el esquema financiero que maneja es  
"demasiado alto y no permite que los abonos  
"aumenten lo suficiente para compensar el  
"crecimiento del saldo, conduciendo a la  
"insolvencia de la actora." (Amparo directo civil  
4507/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia  
Civil del Primer Circuito, identificado con el número 32  
del legajo).*

*"En el caso, el esquema financiero diseñado en el  
"contrato base de la acción se aparta de lo previsto  
"en los artículos 4°, 49, 77, 65, 106, fracción V y  
"112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de  
"Instituciones de Crédito.*



"En primer término, al no estar demostrado el  
"requisito de previo cumplimiento consistente en la  
"debida estimación de viabilidad económica del  
"crédito, impuesto por el artículo 65 reproducido  
"con antelación.

"En efecto, es política bancaria derivada de dicho  
"dispositivo legal, que para que una persona  
"pudiera ser sujeto de crédito, tenía que demostrar  
"ingresos suficientes que rebasaran en  
"determinada medida el importe del pago mensual,  
"que los propios bancos establecían según el  
"monto del crédito solicitado.

"De esta manera, se sigue que la institución  
"demandada, para otorgar el financiamiento,  
"estuvo constreñida a efectuar la estimación del  
"proyecto de viabilidad económica y de los otros  
"aspectos que marca la disposición, procurando  
"que las condiciones del crédito guardaran un sano  
"equilibrio con la situación presente y previsible  
"del acreditado.

"Esto es lo que la parte quejosa denomina como el  
" 'estudio socioeconómico o de factibilidad  
"económica', que se traduce, entre otras cosas, en  
"el estudio correspondiente de las condiciones



*"económicas presentes y previsibles del  
"acreditado, tendiente a verificar su capacidad de  
"pago del financiamiento conforme creciera el  
"ritmo de la inflación.*

*"En el caso, no está acreditado que se haya llevado  
"a cabo la estimación de ley del proyecto de  
"viabilidad económica, ni el estudio de la situación  
"presente y previsible de los acreditados, hoy  
"quejosos, condición indispensable para el  
"otorgamiento del financiamiento bancario y  
"principio fundamental que debió observarse a fin  
"de que el banco pudiera recuperar el crédito y  
"evitar situaciones de insolvencia y por ende, de  
"falta de pago, pues de haberlo hecho dada su  
"condición de experto financiero, hubiera advertido  
"la inviabilidad del crédito en las condiciones en  
"que fue otorgado.*

*"Para constatar lo antes dicho es pertinente  
"señalar, que la parte demandada mediante escrito  
"de cuatro de noviembre de mil novecientos  
"noventa y seis, que aparece a fojas ciento  
"veintiséis y ciento veintisiete del juicio natural,  
"sólo ofreció como pruebas de su parte la  
"confesional de los actores; la documental pública  
"consistente en el contrato de apertura de crédito  
"celebrado el trece de diciembre de mil*



"novecientos noventa y cuatro ante el Notario  
"Público número 157 del Distrito Federal; la  
"documental privada consistente en el estado de  
"cuenta correspondiente al mes de septiembre de  
"mil novecientos noventa y seis; la instrumental de  
"actuaciones consistente en todo lo actuado y, la  
"presuncional legal y humana.

"Lo anterior, pone de manifiesto que la institución  
"crediticia tercero perjudicada, no probó haberse  
"apegado a las sanas prácticas y usos bancarios,  
"máxime si se toma en cuenta, según se verá más  
"adelante, que en forma por demás incongruente e  
"ilegal, desde el momento en que se pactó el  
"crédito en controversia, la institución bancaria  
"concedió un crédito adicional para cubrir los  
"intereses que se generaran, lo cual demuestra que  
"desde un principio el banco consideró que los  
"intereses devengados iban a ser mayores que los  
"pagos, o sea, que los acreditados no iban a poder  
"cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a  
"que se estaban obligando." (Amparo directo civil  
6397/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia  
Civil del Primer Circuito, correspondiente al legajo  
número 34 ).

*"En el caso, el esquema financiero diseñado en el  
"contrato base de la acción se aparta de lo previsto  
"en los artículos 4°, 49, 77, 65, 106, fracción V y  
"112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de  
"Instituciones de Crédito.*

*"En primer término, al no estar demostrado el  
"requisito de previo cumplimiento consistente en la  
"debida estimación de viabilidad económica del  
"crédito, impuesto por el artículo 65 reproducido  
"con antelación.*

*"En efecto, es política bancaria derivada de dicho  
"dispositivo legal, que para que una persona  
"pudiera ser sujeto de crédito, tenía que demostrar  
"ingresos suficientes que rebasaran en  
"determinada medida el importe del pago mensual,  
"que los propios bancos establecían según el  
"monto del crédito solicitado.*

*"De esta manera, se sigue que la institución  
"demandada, para otorgar el financiamiento,  
"estuvo constreñida a efectuar la estimación del  
"proyecto de viabilidad económica y de los otros  
"aspectos que marca la disposición, procurando  
"que las condiciones del crédito guardaran un sano  
"equilibrio con la situación presente y previsible  
"del acreditado.*





"Esto es lo que la parte quejosa denomina  
"obligación legal de previsión', que se traduce,  
"entre otras cosas, en el estudio correspondiente  
"de las condiciones económicas presentes y  
"previsibles del acreditado, tendiente a verificar su  
"capacidad de pago del financiamiento conforme  
"creciera el ritmo de la inflación.

"En el caso no está acreditado que se haya llevado  
"a cabo la estimación de ley del proyecto de  
"viabilidad económica ni el estudio de la situación  
"presente y previsible del acreditado, hoy quejoso,  
"condición indispensable para el otorgamiento del  
"financiamiento bancario y principio fundamental  
"que debió observarse a fin de que el banco  
"pudiera recuperar el crédito y evitar situaciones  
"de insolvencia y por ende de falta de pago, pues  
"de haberlo hecho dada su condición de experto  
"financiero, hubiera advertido la inviabilidad del  
"crédito en las condiciones en que fue otorgado.

"Para constatar lo antes dicho, es pertinente  
"señalar que como se aprecia del escrito inicial de  
"demanda, el antes actor, en el hecho X, entre otras  
"cuestiones, manifestó que 'el contrato original es  
"nulo de pleno derecho, por ser violatorio del  
"artículo 65, de la Ley de Instituciones de Crédito,

*"en virtud de que el crédito se concedió con base  
"en un modelo financiero inviable, imposible su  
"pago, pues el banco se abstuvo de realizar el  
"estudio previo de viabilidad económica que la ley  
"le obliga para el otorgamiento de un crédito.*

*"Es el caso que al contestar la demanda, la  
"institución de crédito, sobre el particular dijo:*

*"X.- Se niega lo aseverado en el hecho décimo, ya  
"que el contrato inicial celebrado entre las partes  
"no es violatorio de lo dispuesto por los artículos  
"65 y 106 V de la Ley de Instituciones de Crédito  
"puesto que al momento de hacerse el estudio para  
"considerar al hoy actor como sujeto de crédito se  
"contempló la viabilidad del proyecto....'*

*"Empero, mediante escrito de fecha once de abril  
"de mil novecientos noventa y siete, que aparece a  
"fojas 43 y 44 del expediente natural, sólo ofreció  
"como pruebas de su parte la confesional del actor;  
"la instrumental pública consistente en el  
"documento base de la acción, consistente en el  
"testimonio público de la escritura 28,255 de  
"catorce de enero de mil novecientos noventa y  
"tres; la instrumental pública consistente en el  
"testimonio de la escritura 14,861 de fecha veinte  
"de octubre de mil novecientos noventa y cinco; la*



"instrumental pública consistente en todas y cada una de las actuaciones realizadas; y la presuncional legal y humana; con la aclaración de que por diverso ocursu de veinticinco de abril del año pasado, el banco demandado se desistió de la referida confesional, a propósito de lo cual acordó el juez de primer grado: '...se tiene por desistido a su perjuicio de la prueba confesional a cargo de la actora, para todos los efectos legales a que haya lugar...'.

Lo anterior, pone de manifiesto que la institución crediticia tercero perjudicada, no probó haberse apegado a las sanas prácticas y usos bancarios, máxime si se toma en cuenta, según se verá más adelante, que en forma por demás incongruente e ilegal, desde el momento en que se pactó el crédito en controversia, la institución bancaria concedió un crédito adicional para cubrir los intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio el banco consideró que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que el acreditado no iba a poder cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaba obligando." (amparo directo civil 10037/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el número 36 del legajo).



*"La ley, como puede verse de la transcripción  
"precedente, para asegurarse que las instituciones  
"de crédito cumplan con lo anterior, encomienda a  
"la Comisión Nacional Bancaria la vigilancia debida  
"para que se observe lo dispuesto en el citado  
"artículo 65 y en un afán de que la banca se apegue  
"a la sanas prácticas y usos bancarios, el artículo  
"106, fracción V, del propio ordenamiento, les  
"prohíbe celebrar operaciones pactando  
"condiciones y términos que se aparten de manera  
"significativa del mercado prevaleciente en el  
"momento del otorgamiento, de las políticas  
"generales de la institución y de las sanas  
"prácticas y usos bancarios.*

*"En este mismo sentido, la Ley de Instituciones de  
"Crédito, en su artículo 112, fracción V, incisos c) y  
"d), considera como un delito el que los empleados  
"y funcionarios de los bancos otorguen créditos o  
"los renueven en forma parcial o en su totalidad, a  
"sabiendas del estado de insolvencia del  
"acreditado.*

*"Es indudable que los cambios en las condiciones  
"económicas y financieras del país van haciendo  
"necesario ir actualizando las condiciones de los*



"créditos; sin embargo, por ningún motivo se  
"justifica que tenga que transgredirse la ley, pues  
"es precisamente el estricto apego a ella la  
"solución de cualquier problema por severo que  
"sea, debiendo en todo caso actualizarse cuando  
"así sea necesario antes de tomar alguna acción  
"fuera del marco del derecho.

"Es pertinente ahora conocer el análisis del crédito  
"bancario con garantía hipotecaria, realizado por  
"Othón Pérez Fernández, con la asesoría de Jorge  
"Rocha Reyes, titulado 'Análisis Jurídico  
"Financiero del Crédito Bancario', publicado en la  
"Revista del Centro de Estudios de Actualización  
"Jurídica, año 1, número 1, febrero de 1997,  
"páginas 28 a 33, en donde, entre otras cosas, se  
"señala que:

"Las opiniones doctrinales aludidas, ponen de  
"relieve la naturaleza, así como el contexto  
"financiero y jurídico del crédito bancario diseñado  
"y definido por las instituciones crediticias como  
"crédito adicional' o 'refinanciamiento de  
"intereses', que se otorga mediante contratos de  
"apertura de crédito, entre otros; también precisan  
"el significado real de este concepto, es decir, un  
"acto simulado que encierra un pacto de

*"anatocismo, que al estar prohibido por la ley está  
"afectado de nulidad.'*

*"En el caso, el esquema financiero diseñado en el  
"contrato base de la acción se aparta de lo previsto  
"en los artículos 4°, 49, 77, 65, 106, fracción V y  
"112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de  
"Instituciones de Crédito.*

*"En primer término, al no estar demostrado el  
"requisito de previo cumplimiento consistente en la  
"estimación de viabilidad económica del crédito,  
"impuesto por el artículo 65 reproducido con  
"antelación.*

SUPREMA  
JUSTICIA DE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*"En efecto, es política bancaria derivada de dicho  
"dispositivo legal, que para que una persona pueda  
"ser sujeto de crédito, ha de demostrar ingresos  
"suficientes que rebasen en determinada medida el  
"importe del pago mensual, que los propios bancos  
"establecen, según el monto del crédito solicitado.  
"De esta manera, se sigue que la institución  
"demandada, para otorgar el financiamiento,  
"estuvo constreñida, no simplemente facultada,  
"según alegan los solicitantes de garantías, a  
"efectuar la estimación del proyecto de viabilidad  
"económica y de los otros aspectos que marca la  
"disposición, procurando que las condiciones del*





"crédito guardaran un sano equilibrio con la  
"situación presente y previsible del acreditado.

"Esto es lo que los quejosos correctamente  
"consideran 'obligación de estimar el  
"comportamiento previsible de las variables  
"económicas', que se traduce, entre otras cosas,  
"en el estudio imprescindible de las condiciones  
"económicas presentes y previsibles de la parte  
"acreditada, tendiente a verificar su capacidad de  
"pago del financiamiento conforme creciera el  
"ritmo de la inflación.

"En el caso no está acreditado, como debió  
"hacerse en términos de lo dispuesto por el  
"artículo 1194, del Código de Comercio, que se  
"haya llevado a cabo la estimación de ley del  
"proyecto de viabilidad económica ni el estudio de  
"la situación presente y previsible de los  
"acreditados, hoy quejosos, condición  
"indispensable para el otorgamiento del  
"financiamiento bancario y principio fundamental  
"que previa y necesariamente debió observarse a  
"fin de que el banco pudiera estimar la posibilidad  
"de recuperar el crédito y evitar situaciones de  
"insolvencia y por ende de falta de pago, pues de  
"haberlo hecho dada su condición de experto

"financiero, hubiera advertido la inviabilidad del  
"crédito en las condiciones en que fue otorgado.

"Para constatar lo antes dicho, es pertinente  
"señalar que como se aprecia del escrito inicial de  
"demanda, los antes actores, en el capítulo de  
"CONSIDERACIONES DE DERECHO, apartado 2,  
"Contenido de la Escritura, inciso b), Del destino de  
"los fondos, manifestó:

"Por otro lado, el que el banco debe estimar la  
"viabilidad económica del proyecto, pues conviene  
"recordar que sólo está facultado a dar  
"financiamientos, es claro que el banco  
"demandado omitió realizar un estudio para  
"estimar la viabilidad económica del  
"financiamiento, violando con ello el artículo 65 de  
"la Ley de Instituciones de Crédito'.

"Es el caso que al contestar la demanda, la  
"institución de crédito nada dijo sobre el particular,  
"ya que en la parte correspondiente sólo expresó:  
"CONSIDERACIONES DE DERECHO...  
"2.- Contenido de la Escritura... b).- Dada la  
"naturaleza del contrato, la obligación principal a  
"cargo de mi poderdante, quedó satisfecha desde  
"el momento de la celebración del contrato al  
"PONER A DISPOSICION DE LA ACTORA, la suma



205

"de [REDACTED]  
"PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL'.

"Lo anterior, pone de manifiesto que la institución  
"crediticia hoy tercero perjudicada no probó  
"haberse apegado a las sanas prácticas y usos  
"bancarios, máxime si se toma en cuenta, según se  
"verá más adelante, que en forma por demás  
"incongruente e ilegal, desde el momento en que  
"se pactó el crédito en controversia, la institución  
"bancaria concedió un crédito adicional para cubrir  
"los intereses que se generaran, lo cual demuestra  
"que desde un principio consideró que los  
"intereses devengados iban a ser mayores que los  
"pagos, o sea, que los acreditados no iban a estar  
"en capacidad de cubrir con sus ingresos los  
"pagos mensuales a que se estaban obligando."  
(amparo directo civil 1887/98, del Séptimo Tribunal  
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,  
identificado con el número 38 del legajo.

"Por otro lado, con independencia de lo anterior,  
"debe decirse que el esquema financiero  
"diseñado en el contrato base de la acción, se  
"aparta de lo previsto en los artículos 4o., 49,  
"77, 106, fracción V y 112, fracción V, incisos  
"c) y d) de la Ley de Instituciones de Crédito; por



"no estar demostrado en autos, el requisito de  
 "previo cumplimiento al otorgamiento del  
 "crédito, consistente en la debida estimación de  
 "viabilidad económica del crédito impuesto por  
 "el artículo 65 de dicha ley.

"Los bancos, con una sana práctica bancaria,  
 "tienen la obligación legal de cuidar que las  
 "condiciones de los créditos, a saber, sus montos,  
 "plazos, regímenes de amortización, etcétera,  
 "guarden una relación adecuada con la situación  
 "económica presente y previsible de los  
 "acreditados, según lo previene el artículo 65, de  
 "la mencionada ley, que dice: 'Art. 65.- **Para el**  
 "otorgamiento de sus financiamientos, las  
 "instituciones de crédito deberán estimar la  
 "viabilidad económica de los proyectos de  
 "inversión respectivos, los plazos de recuperación  
 "de éstos, las relaciones que guarden entre sí  
 "los distintos conceptos de los estados  
 "financieros o la situación económica de los  
 "acreditados, y la calificación administrativa y  
 "moral de estos últimos, sin perjuicio de  
 "considerar las garantías que, en su caso, fueren  
 "necesarias. Los montos, plazos, regímenes de  
 "amortización, y en su caso, períodos de gracia de  
 "los financiamientos, deberán tener una relación  
 "adecuada con la naturaleza de los proyectos de



"inversión y con la situación presente y  
"previsible de los acreditados.- La Comisión  
"Nacional Bancaria vigilará que las instituciones  
"de crédito observen debidamente lo dispuesto en  
"el presente artículo'.

"La ley, como puede verse de la transcripción  
"precedente, para asegurarse que las  
"instituciones de crédito cumplan con lo anterior,  
"encomienda a la Comisión Nacional Bancaria la  
"vigilancia debida para que se observe lo  
"dispuesto en el citado artículo 65 y en afán de  
"que la banca se apegue a las sanas prácticas y  
"usos bancarios, el artículo 106, fracción V, de la  
"Ley de Instituciones de Crédito, les prohíbe  
"celebrar operaciones pactadas en condiciones  
"y términos que se aparten de manera  
"significativa del mercado prevaleciente en el  
"momento del otorgamiento, de las políticas  
"generales de la institución y de las sanas  
"prácticas y usos bancarios.

"En este mismo sentido, la ley mencionada, en su  
"artículo 112, fracción V, incisos c) y d),  
"considera como un delito el que los empleados  
"y funcionarios de los bancos otorguen  
"créditos o los renueven en forma parcial o en su

"totalidad, a sabiendas del estado de insolvencia  
"del acreditado.

"Es indudable que los cambios en las  
"condiciones económicas y financieras del país  
"van haciendo necesario ir actualizando las  
"condiciones de los créditos; sin embargo, por  
"ningún motivo se justifica que tenga que  
"transgredirse la ley, pues es precisamente el  
"estricto apego a ella la solución a cualquier  
"problema por severo que sea, debiendo en todo  
"caso, actualizarse cuando así sea necesario  
"antes de tomar alguna acción fuera del marco  
"del derecho.

REPÚBLICA  
JUSTICIA DE  
MEXICO

"Es política bancaria derivada del dispositivo  
"legal transcrito, que para que una persona  
"pudiera ser sujeto de crédito, tenía que  
"demostrar ingresos suficientes que rebasaran  
"en determinada medida el importe del pago  
"mensual, que los propios bancos establecían  
"según el monto del crédito solicitado.

"De esta manera, se sigue que la institución  
"demandada, para otorgar el financiamiento,  
"estuvo constreñida a efectuar la estimación  
"del proyecto de viabilidad económica y de los  
"otros aspectos que marca la disposición,





"procurando que las condiciones del crédito  
"guardaran un sano equilibrio con la situación  
"presente y previsible del acreditado, que se  
"traduce, entre otras cosas, en el estudio  
"correspondiente de las condiciones económicas  
"presentes y previsibles del acreditado, tendiente  
"a verificar su capacidad de pago del  
"financiamiento conforme creciera el ritmo de la  
"inflación.

"En el caso concreto no está acreditado que se  
"haya llevado a cabo la estimación de ley del  
"proyecto de viabilidad económica ni el estudio de  
"la situación presente y previsible de los  
"acreditados, hoy quejosos, condición  
"indispensable para el otorgamiento del  
"financiamiento bancario y principio fundamental  
"que debió observarse a fin de que el banco  
"pudiera recuperar el crédito y evitar  
"situaciones de insolvencia y por ende de falta  
"de pago, pues de haberlo hecho dada su  
"condición de experto financiero, hubiera  
"advertido la inviabilidad del crédito en las  
"condiciones en que fue otorgado." (amparo  
directo civil 328/98, del Octavo Tribunal Colegiado en  
Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el  
número 45 del legajo).

En discrepancia con lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en esencia razonaron lo siguiente:

a) En el supuesto de que la institución bancaria no hubiere observado lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, el perjuicio lo resentiría éste y enfrentaría su responsabilidad ante la Comisión Nacional Bancaria de acuerdo con el contenido del citado precepto, razonamiento por el cual estima infundado que existiera lesión en el contrato cuya nulidad se reclamó.

b) Lo relativo a que el citado proyecto de viabilidad económica no se realizó y que era necesario para determinar para qué debe aplicarse el crédito, en nada perjudica a los quejosos, porque si se realizó o no el citado proyecto, conllevaría a una responsabilidad administrativa del banco actor y, por el contrario, beneficiaría a los quejosos, pues el sólo hecho de que el banco no haya realizado el citado proyecto, no puede conducir a la nulidad del contrato, porque es claro que los quejosos también formularon su propio proyecto de viabilidad y concluyeron que debían de solicitar un crédito para los fines que perseguían, entonces el que el banco no lo haya hecho implica un riesgo del banco de no poder recuperar el crédito, pero no la nulidad del mismo, como para incluso llegar a perder la garantía hipotecaria otorgada.



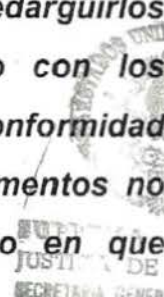
La anterior síntesis deriva de la parte conducente de las ejecutorias que se transcriben a continuación:

*"Por otra parte, los quejosos argumentan que  
"resultan aplicables al caso los artículos que  
"invocan, con lo que justifican que se está en  
"presencia de una operación ilícita de préstamo,  
"que no produce obligación, ni acción, que se  
"realizó contraviniendo normas de derecho público  
"y de carácter prohibitivo, porque el banco se  
"abstuvo de cumplir con los requisitos que le  
"impone el artículo 65 de la Ley de Instituciones de  
"Crédito, por lo que la institución bancaria actuó  
"dolosamente, en forma negligente, abusando de la  
"ignorancia de los acreditados, pues se otorgó un  
"préstamo a sabiendas que no era viable, de  
"manera que se actualiza el supuesto de un acto  
"jurídico inexistente, porque en realidad se trató de  
"un préstamo para pago de pasivos, en  
"contravención del artículo 323 de la Ley General  
"de Títulos y Operaciones de Crédito, razones por  
"las que, afirman, hay violación de los artículos que  
"precisan, al declararse improcedente la acción  
"que intentaron y permitir que el banco obtenga un  
"lucro desproporcionado.*



"Tampoco aciertan los quejosos en lo anterior,  
"habida cuenta que el contrato de apertura de  
"crédito simple con garantía hipotecaria se realizó  
"ante notario público, lo que da el carácter a ese  
"instrumento de prueba plena de conformidad con  
"el artículo 1292 del Código de Comercio, que  
"dispone:

" 'Los instrumentos públicos hacen prueba plena  
"aunque se presenten sin citación del colitigante,  
"salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos  
"de falsedad y para pedir su cotejo con los  
"protocolos y archivos. En caso de inconformidad  
"con el protocolo o archivo, los instrumentos no  
"tendrán valor probatorio en el punto en que  
"existiere la inconformidad'.



"Por tanto, es infundado todo lo que se aduce  
"respecto de que se trata de un préstamo para  
"pago de pasivos, puesto que está claro que el  
"contrato lo es de apertura de crédito simple con  
"garantía hipotecaria, lo que no es ilícito ni  
"contraviene disposiciones de orden público de  
"carácter prohibitivo, o se carezca en el documento  
"relativo de obligaciones por parte de los  
"promovientes, pues deben de responder de esas  
"obligaciones que contrajeron como consecuencia  
"de haber firmado el contrato y de recibir la



"cantidad objeto del crédito. El texto del artículo 65  
"de la Ley de Instituciones de Crédito, que para  
"mejor ilustración se transcribe:

" 'Art. 65.- Para el otorgamiento de sus  
"financiamientos, las instituciones de crédito  
"deberán estimar la viabilidad económica de los  
"proyectos de inversión respectivos, los plazos de  
"recuperación de éstos, las relaciones que guarden  
"entre sí los distintos conceptos de los estados  
"financieros o la situación económica de los  
"acreditados, y la calificación administrativa y  
"moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar  
"las garantías que, en su caso, fueren necesarias.  
"Los montos, plazos, regímenes de amortización, y  
"en su caso, periodos de gracia de los  
"financiamientos, deberán tener una relación  
"adecuada con la naturaleza de los proyectos de  
"inversión y con la situación presente y previsible  
"de los acreditados.--- La Comisión Nacional  
"Bancaria vigilará que las instituciones de crédito  
"observen debidamente lo dispuesto en el presente  
"artículo'.

"Permite afirmar que en el evento de que el banco,  
"aquí tercero perjudicado, no hubiera atendido a tal  
"precepto, en nada puede agravar a los aquí  
"quejosos, porque, en su caso, tal hipótesis sería

*"en perjuicio de la institución de crédito frente a la  
"Comisión Nacional Bancaria, y todo ello no puede  
"servir de apoyo para afirmar que se genera un  
"lucro desproporcionado." (Amparo directo civil  
439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil  
del Séptimo Circuito, identificado con el número 70 del  
legajo).*

*"Finalmente en el quinto concepto de violación los  
"quejosos aducen que les causa agravios la  
"sentencia del tribunal de alzada por considerar  
"que no existe lesión en el contrato cuya nulidad se  
"reclanó la que sí se actualizó agregan los  
"quejosos en términos del artículo 17 del Código  
"Civil para el Distrito Federal en Materia Común y  
"para toda la República en Materia Federal, y del  
"artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito  
"por lo que es el banco quien debe sufrir las  
"consecuencias del incumplimiento de sus  
"obligaciones.*

*"Cabe decir que en el supuesto de que Banco de  
"Oriente, Sociedad Anónima no hubiere observado  
"lo previsto en el artículo 65 de la ley de  
"Instituciones de Crédito, como ya se vio, el  
"perjuicio lo resentiría éste y enfrentaría su  
"responsabilidad ante la Comisión Nacional*





*"Bancaria de acuerdo al contenido de ese precepto."* (Amparo directo civil 463/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, identificado con el número 71 del legajo)

*"Lo relativo al citado proyecto de viabilidad, que sostienen los quejosos no se realizó, y que era necesario para determinar para qué debe aplicarse el crédito, en nada perjudica a los quejosos, porque, si se realizó o no el citado proyecto, como anteriormente se ha sostenido, ello conllevaría una responsabilidad administrativa del banco actor y por el contrario les beneficiaría a los quejosos. Ahora bien, pretender que por el solo hecho de que el banco no haya realizado el citado proyecto, no puede conducir, como lo pretende, a la nulidad del contrato, porque es claro, que los propios quejosos, también formularon su propio proyecto de viabilidad y concluyeron que debían de solicitar un crédito para los fines que perseguían. Entonces, el que el banco no lo haya hecho, implica, como se ha sostenido, un riesgo del Banco de no poder recuperar el crédito otorgado, pero no la nulidad del mismo, como para incluso llegar a perder la garantía hipotecaria otorgada."*

*"Ahora bien, lo argumentado en el sentido de que  
 "el banco incumplió con la entrega de las partidas,  
 "es infundado, porque por tratarse de un contrato  
 "de cuenta corriente, no puede hablarse de  
 "partidas o ministraciones, porque el tratamiento  
 "que se da a este tipo de créditos, es de cargos y  
 "abonos, por lo que no puede hablarse de partidas  
 "o ministraciones, porque tales acepciones, son  
 "propias de otro tipo de contratos en los que el  
 "crédito otorgado, se entrega calendarizado y  
 "según el avance del proyecto." (Amparo directo civil  
 1412/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo  
 Tercer Circuito, identificado con el número 197 del  
 legajo).*

ESTADO  
 JUSTICIA  
 SECRETARIA G.

*"Ahora bien, admitida como cierta la premisa de  
 "que el Código Civil del Distrito Federal es el  
 "aplicable supletoriamente al caso en estudio,  
 "debe decirse que nuestro más alto Tribunal se  
 "opone a aplicar la teoría de la imprevisión dentro  
 "de aquellas legislaciones que no la contemplan  
 "expresamente en alguno de sus preceptos, por  
 "estimar primordial la seguridad de los contratos;  
 "por tanto, dicho alto Tribunal, siguiendo el sistema  
 "rígido de éstos, fincado en el artículo 1796 del  
 "Código Civil del Distrito Federal, de acuerdo con*



"el principio 'pacta sunt servanda' o de  
"obligatoriedad del contrato, constriñe a las partes  
"al exacto cumplimiento de las prestaciones  
"expresamente pactadas y, además, a las  
"consecuencias que de los mismos se deriven,  
"según su naturaleza, conforme a la buena fe, al  
"uso o la ley, mandamiento que, en dichos  
"términos, no deja lugar a su interpretación a  
"efecto de aplicar la teoría de la imprevisión en  
"razón de esa buena fe, que obviamente constituye  
"un principio general de derecho, pues  
"precisamente, con base en ella, el obligado debe  
"conducirse con una persona consciente de su  
"responsabilidad en el cumplimiento de sus  
"obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud  
"de su contenido, no obstante que sobrevengan  
"acontecimientos que no se previeron o no  
"pudieron preverse y que la modifiquen,  
"considerando que en caso de existir tales causas  
"imprevisibles que viniesen a alterar  
"fundamentalmente la economía de un determinado  
"grupo social, no apreciadas por los contratantes,  
"se modifiquen las condiciones de los contratos  
"respectivos, a través del ejercicio de las  
"facultades conferidas al Poder Legislativo, o sea,  
"mediante disposiciones de carácter general por él  
"emitidas.



"Ilustra lo anterior la tesis sustentada por la  
"Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la  
"Nación, en su anterior integración, publicada en la  
"página treinta y cinco del Semanario Judicial de  
"la Federación, Séptima Epoca, Tomo: 193-198,  
"Cuarta Parte, cuya literalidad es como sigue:

" 'CONTRATOS. INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA  
"DE LA IMPREVISION.- El artículo 1796 del Código  
"Civil del Distrito Federal, supletoriamente  
"aplicado, siguiendo el sistema rígido de los  
"contratos, acorde con el principio relativo a los  
"efectos de la declaración de voluntad, dispone  
"que aquéllos obligan a las partes al exacto  
"cumplimiento de las prestaciones expresamente  
"pactadas, y además, a las consecuencias que de  
"los mismos se deriven, según su naturaleza,  
"conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto  
"que, en esas condiciones, no deja lugar a su  
"interpretación a fin de aplicar la teoría de la  
"imprevisión en razón de esa buena fe, que  
"obviamente constituye un principio general de  
"derecho, pues precisamente, con base en ella, el  
"obligado debe conducirse como persona  
"consciente de su responsabilidad en el  
"cumplimiento cabal de sus obligaciones,  
"cualquiera que resulte la magnitud de su